



UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO



**“EL EJERCICIO DE LA TUTELA PROCESAL CONSTITUCIONAL CONTRA
RESOLUCIONES JUDICIALES Y EL RIESGO DE AFECTACIÓN DE LA
COSA JUZGADA DEL PROCESO COMÚN ORDINARIO, A PARTIR DE LOS
PROCESOS DE HABEAS CORPUS Y DE AMPARO RESUELTOS POR EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN DERECHO
CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

AUTOR:

JUAN CARLOS ZAPATA MORE

ASESOR:

DR. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO

LAMBAYEQUE – PERÚ

2017

“El ejercicio de la tutela procesal constitucional contra resoluciones judiciales y el riesgo de afectación de la cosa juzgada del proceso común ordinario, a partir de los procesos de habeas corpus y de amparo resueltos por el Tribunal Constitucional”

Juan Carlos Zapata More

AUTOR

Freddy Widmar Hernández Rengifo

ASESOR

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado de MAESTRO EN LA MAESTRIA DERECHO CONSTITUCIONAL

APROBADO POR:

Miguel Arcángel Arana Cortez

DR.
PRESIDENTE

Rafael Hernández Canelo

DR.
SECRETARIO

Oscar Ramón Vilchez Vélez

DR.
VOCAL

DEDICATORIA:

A mis padres y hermanos que me han ayudado en mi camino para llegar a este punto de mi vida académica.

.

AGRADECIMIENTO:

**Al Dr. Manuel Rosas Córdova quien con sus sabias palabras y consejos
hizo cambiar el rumbo de mi carrera universitaria.**

INDICE

Dedicatoria.
Agradecimiento.
Resumen
Abstract
Introducción

CAPÍTULO I ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1.	Realidad Problemática	4
1.2.	Formulación del Problema	5
1.3.	Justificación del Problema	7
1.4.	Objetivos	8
1.4.1.	Objetivo General	8
1.4.2.	Objetivo Específico	8
1.5.	Aspectos metodológicos	9
1.5.1.	Hipótesis	9
1.5.2.	Variables e indicadores	9
1.6.	Marco Metodológico	10
1.6.1.	Diseño de contrastación de hipótesis	10
1.6.2.	Población y Muestra	10

1.7.	Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos	11
1.8.	Métodos y procedimientos	12

CAPÍTULO II

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO SUPREMO INTÉRPRETE DE LA CONSTITUCIÓN, FACULTADES Y LÍMITES

2.1.	Jurisdicción Constitucional.	14
2.2.	El Tribunal Constitucional.	16
2.2.1.	Características del Tribunal Constitucional.	17
2.2.2.	Naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional.	18
2.2.2.1.	El Tribunal Constitucional como órgano constitucional.	18
2.2.2.2.	El Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional	20
2.2.2.3.	El Tribunal Constitucional como órgano político	21
2.3.	El Tribunal Constitucional del Perú.	22
2.3.1.	Funciones y Atribuciones del Tribunal Constitucional	23
2.3.1.1.	Competencias en los procesos constitucionales	23
2.3.1.2.	Competencias exclusivas	25
2.3.1.3.	Competencias compartidas	27
2.3.1.3.1.	El control difuso de las normas legales	27
2.3.1.4.	Competencias no previstas e implícitas	29
2.3.2.	Votación y Publicación de las Decisiones del Tribunal Constitucional	30
2.3.3.	Alcances sobre la Jurisdicción Constitucional en Legislación Comparada.	33
2.3.3.1.	Tribunal constitucional en Alemania	33
2.3.3.2.	La Corte Constitucional en Italia	34
2.3.3.3.	El Tribunal Constitucional de España	36
2.3.3.4.	La Corte Constitucional en Colombia	38
2.3.3.5.	El Tribunal de Garantías Constitucionales en Ecuador	40
2.3.3.6.	Tribunal de Control de Constitucionalidad de Guatemala	41

2.4. Límites al Principio de Autonomía Procesal	42
2.4.1. Límites formales	43
2.4.2. Límites Materiales.	47
2.5. Labor Interpretativa del Tribunal Constitucional como manifestación del Principio de Autonomía Procesal	54

CAPÍTULO III Procesos Constitucionales de Tutela de Derechos Fundamentales

3.1. Procesos Constitucionales de Tutela de Derechos Fundamentales	59
3.1.1. Proceso Habeas Corpus	61
3.1.2. Proceso de Amparo	79
3.1.2.1. Derechos Fundamentales Procesales	83

CAPÍTULO V EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES Y LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

4.1. Amparo contra Resoluciones Judiciales	94
4.2. La Seguridad Jurídica	104
4.3. La Seguridad Jurídica y el Estado Constitucional	107
4.4. La Cosa Juzgada	108
4.5. La cosa juzgada constitucional	111

CAPÍTULO V ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS

5.1. Presentación de Casos	126
5.2. Discusión de Resultados y contrastación de hipótesis	155
CONCLUSIONES	160
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES	161
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	162

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto de estudio un fenómeno que ha sido consecuencia de las facultades poco limitadas autoatribuidas por el TC, en virtud del Principio de Autonomía Procesal, nos referimos a la denominada Cosa Juzgada Constitucional, que es la potestad del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto sentencias del Poder Judicial que han adquirido la calidad de cosa juzgada y que son cuestionadas a través de acciones de amparo y de hábeas corpus, dando lugar a las figuras de Hábeas Corpus y Acciones de Amparo contra resolución judicial, siendo una de los principales cuestionamientos la Afectación a la Seguridad Jurídica y a la Predictibilidad de las Resoluciones Judiciales, pareciendo una instancia más la que se puede acudir, mecanismo que puede ser empleado incluso para intereses políticos o distintos al alcance de la justicia, y generando que la cosa juzgada a nivel judicial pierda su esencia de inmutable.

ABSTRACT

The present work has as object of study a phenomenon that has been consequence of the little limited faculties self-assigned by the TC, by virtue of the Principle of Procesal Autonomy, we refer to the so-called Constitutional Court, which is the Constitutional Court's power to leave if effect judgments of the Judiciary that have acquired the status of *res judicata* and are questioned through amparo and habeas corpus actions, giving rise to the figures of Habeas Corpus and Actions of Amparo against judicial resolution, being one of the main questions the Affectation to the Legal Security and the Predictability of the Judicial Resolutions, seemingly one more instance that can be resorted to, a mechanism that can be used even for political or other interests within the reach of justice, and generating that the thing judges at a judicial lose its essence of immovable.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación está orientado al estudio del ejercicio de la tutela procesal constitucional contra resoluciones judiciales y el riesgo de afectación de la cosa juzgada del proceso común ordinario la figura denominada, lo que trae a colación necesariamente a la figura de la cosa juzgada constitucional, cuya principal implicancia es que las sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional, que den fin a un proceso y que hayan adquirido la calidad de firmes y por tanto de cosa juzgada pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional, en base a parámetros poco claros o definidos, entre ellos el principio de autonomía procesal que no se corresponde con los límites del Tribunal Constitucional como organismo supremo controlador de la constitución, afectando con ello la seguridad jurídica y la predictibilidad de las resoluciones judiciales recaída en un proceso común.

De este modo, en el primer capítulo se encuentra abordada la parte metodológica de la presente investigación, partiendo de la realidad problemática, de la cual surgió la presente investigación, la formulación del problema, los objetivos, justificación e importancia, hasta la proposición de una hipótesis.

En el Segundo Capítulo se analizará al Tribunal Constitucional tanto en su estructura orgánica como en su función de supremo intérprete de la constitución, se analizarán sus facultades así como sus límites formales y materiales.

En el tercer capítulo versa sobre los procesos constitucionales de hábeas corpus y acción de amparo, los cuales tutelan derechos fundamentales materiales y procesales, incidiendo en sus características y los derechos que

protegen.

En el cuarto capítulo se abordará más específicamente el proceso de amparo contra resoluciones judiciales y la figura de la cosa juzgada constitucional, incidiendo también en lo relativo a la seguridad jurídica como uno de los fines de un estado constitucional de derecho

Por último, el quinto capítulo contiene el análisis de los resultados obtenidos a partir del desarrollo de las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional en donde se ha efectuado el desarrollo de la figura de la cosa juzgada constitucional, posteriormente se procederá a la discusión de los resultados obtenidos a partir de la exploración de las decisiones emitidas por el tribunal Constitucional y la contrastación de la hipótesis planteada.

CAPÍTULO I:

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

La defensa de los derechos y las garantías constitucionales modernamente tienen una gama de manifestaciones, y una de las mismas es precisamente la que se muestra en la vía judicial, vía a la que acuden los justiciables para que un tercero imparcial, luego de haber desarrollado un debido proceso se pronuncie a favor de los pedidos de alguna de las partes.

Pero no todas las sentencias satisfacen a las partes, muchas de las mismas después de ser debidamente impugnadas, terminan siendo siempre cuestionadas y se trata de establecer posibilidades reales para acceder tutelarmente a discutir cuáles son los procedimientos que nos permitan discutir los cuestionamientos que se hacen a las decisiones judiciales.

En esto, la doctrina ha encontrado posibilidades de discutir incluso la legalidad de las propias sentencias que se consideran como cosa juzgada, y en esto han hallado razones suficientes para cuestionarlas precisamente a partir de errores judiciales propiciado en el mismo proceso, y que puedan ser imputables al mismo sistema o a las partes quienes sin querer o con malicia o temeridad han hecho incurrir en vicios en los que la cosa juzgada sencillamente no existe porque se fundamenta en razones cuestionables.

Que quede claro que no implica que a través de los procesos constitucionales se plantee una tercera vía alternativa a la pluralidad de instancias, y que se busque obtener la razón de las pretensiones del demandante. Nada de ello. Entonces, si los procesos constitucionales no

buscan un pronunciamiento judicial sobre el fondo, debe estar debidamente delimitado qué se pretende conseguir con la promoción de los mismos, a pesar que el Código Procesal Constitucional es específico al respecto, pero que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido configurando incluso más allá de la propia norma, presentándose algunas veces como que el juez constitucional tiene un poder que es especial y que permite cambiar sustancialmente los fallos de la justicia ordinaria.

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Por esta razón, y como parte del ejercicio profesional, queremos estudiar e investigar este tema referido a los cuestionamientos constitucionales que se pueden hacer de los fallos en los procesos ordinarios, de tal manera que superando la valla de la seguridad jurídica que ofrece la majestad de la cosa juzgada se llegue a determinar, además de los supuestos normativos, cuál es el ámbito real de pronunciamiento de los jueces constitucionales y de qué manera este procedimiento puede ser comprendido como un real y concreto acto de justicia.

Esto es así, por cuanto el debido proceso ofrece a las partes las oportunidades para que se defiendan y en todo caso expresen lo que a su derecho les que convenga, por lo que la acción constitucional contra las resoluciones judiciales deben partir por analizar estos supuestos que deben verificarse de manera pronta y rápida en la vía judicial.

Pero esto supone también, que consideremos que la vía constitucional viene siendo utilizada por las partes como tercera vía, con la creencia, de

bueno o mala fe, que a través de la misma va a encontrar respuesta positiva a su pretensión después de habersele denegado su pretensión en el proceso común, lo que convertiría al proceso constitucional en una suerte de venta de ilusión de remover un proceso común con cosa juzgada judicial.

Por ello no sólo se debe exigir de parte de los órganos jurisdiccionales un pronunciamiento claro y preciso sobre las pretensiones constitucionales de las partes, sino también de las propias defensas técnicas, a quienes se le reconoce su derecho de acción pero también la obligación de actuar de buena fe en las interposiciones de los procesos de amparo y de habeas corpus, y no por el solo hecho de querer que el proceso se difiera, tarde un tiempo más, como si esto fuera la solución al conflicto originado.

Por ello nos proponemos realizar el presente trabajo de investigación, buscando conocer como la doctrina, la jurisprudencia, las propias demandas, la decisión de los jueces constitucionales y las del Tribunal Constitucional vienen desarrollando y aplicando los supuestos de procedencia de estos procesos contra las resoluciones judiciales finales, de tal forma que ante todo prime el principio de buena fe procesal.

Por ello los problemas en el presente caso queda determinado de la siguiente forma:

¿De qué manera el ejercicio de la tutela procesal constitucional contra resoluciones judiciales puede afectar la inmutabilidad de la cosa juzgada del proceso común ordinario, a partir de los procesos habeas corpus y de amparo resueltos por el Tribunal Constitucional?

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Consideramos que en todos los casos debe primar la justicia que es ante todo el mejor camino para alcanzar la denominada paz social. En este camino, cuando alguna de las partes o el propio juez ha incurrido en error que se ha plasmado en una resolución judicial de fondo entonces corresponde analizar la posible aplicación de supuestos que determinen la nulidad de dicha sentencia, **pero aplicando criterios constitucionales válidos.**

Por tanto, el presente trabajo se justifica en la medida en la que se busca analizar la forma cómo dichos criterios vienen siendo asumidos por los jueces constitucionales, pues se pretende declarar la nulidad de una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada incluso material, por lo que habrá que analizar los supuestos que aplican los jueces constitucionales, a fin de no afectar la seguridad jurídica que otorga la resolución de casos dentro de los procesos ordinarios.

Asimismo, resulta importante el presente trabajo porque sus conclusiones van reflejar la eficacia de la justicia constitucional para corregir errores en los que se ha incurrido con las sentencias en los procesos comunes, de tal manera que el estado generado de manera injusta sea resarcido y opere nuevamente el saneamiento de la causa para que se corrija la situación originada.

1.4. OBJETIVOS:

1.4.1. GENERAL.

Determinar si el ejercicio de la tutela procesal constitucional contra resoluciones judiciales puede afectar la inmutabilidad de la cosa juzgada del proceso común ordinarios, a partir de los procesos habeas corpus y de amparo resueltos por el Tribunal Constitucional.

1.4.2. ESPECIFICOS.

- Establecer la naturaleza jurídica de las acciones constitucionales de garantía como forma eficaz de proteger los derechos fundamentales.
- Precisar los supuestos teóricos que hacen viables la procedencia de acciones constitucionales contra resoluciones judiciales.
- Indicar los lineamientos conceptuales y normativos que sustentan la seguridad jurídica de la cosa juzgada judicial.
- Analizar las resoluciones emitidas en los procesos de habeas corpus y de amparo resueltos por el Tribunal Constitucional en donde se haya modificado la cosa juzgada recaída en un proceso ordinario.

1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.5.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación cuenta con la siguiente hipótesis:

Si se ejerce el ejercicio de la tutela procesal constitucional contra resoluciones judiciales, entonces es posible que se afecte la inmutabilidad de la cosa juzgada del proceso común ordinario, a partir de los procesos de habeas corpus y de amparo resueltos por el Tribunal Constitucional.

1.5.2. VARIABLES

VARIABLES	INDICADORES	SUB INDICADORES	ÍNDICES	TÉCNICAS
VARIABLE INDEPENDIENTE Ejercicio de la tutela procesal constitucional	Habeas corpus Acción de amparo	Afectación debido proceso Fraude procesal	Configura institución No presenta configuración	Análisis de datos Fichaje
VARIABLE DEPENDIENTE: Afectación de la cosa juzgada	Cosa juzgada material Cosa juzgada	Pretensiones penales Pretensiones civiles	Infracción material a la	Análisis de datos

judicial del proceso común	formal		ley sustantiva y adjetiva Infracción al debido proceso	Fichaje
-------------------------------	--------	--	---	---------

1.6. Marco Metodológico

1.6.1. Diseño de contrastación de la hipótesis

Estudio Explorativo

Estudio Descriptivo

Estudio Explicativo

Se aplicarán los siguientes Métodos de Investigación: método de observación, método de análisis, y método de síntesis

1.6.2. Población y muestra

La población está formada por el total de casos que en instancia del Tribunal Constitucional se hayan pronunciado sobre la cosa juzgada recaída en un proceso ordinario.

CUADRO N° 01: MUESTRA A LA QUE SE VA APLICAR LA FICHA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Aspectos Casos	Frecuencia	Porcentaje
Acción de amparo	5	90
Habeas corpus	1	10
Total	10	100

Año: 2017

Fuente: De investigación

Se trabajará en todos los casos en los que se ha emitido resolución final y ha llegado a instancias del Tribunal Constitucional

1.7. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

- LOS MATERIALES son de carácter bibliográfico y corresponden a autores nacionales como extranjeros.
- LAS FUENTES consultadas pertenecen a la especialidad que corresponde el tema materia de investigación.
- LA TECNICA a emplear es la dogmática jurídica.
- En lo que respecta a la RECOLECCION DE INFORMACION DE COMPILACION DE DATOS será necesario el empleo de fuentes de información tales como la observación de la problemática generada en torno a las sentencias que se han expedido en instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1.8. Métodos y procedimientos

a) Método de Análisis

El presente método fue empleado por cuanto se ha iniciado el trabajo por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, habiéndose establecido una relación de causa efecto entre los elementos que componen el objeto materia de investigación.

b) Método Explicativo:

Explicar las consecuencias que podrían darse debido a la utilización de la figura de la cosa juzgada constitucional.

**CAPÍTULO
II
EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
COMO SUPREMO
INTÉRPRETE DE LA
CONSTITUCIÓN,
FACULTADES Y
LÍMITES**

2.1. Jurisdicción Constitucional.

Sobre la jurisdicción constitucional Carpizo¹ ha señalado que la configuración de la jurisdicción constitucional, y con ello, de Tribunales o Cortes Constitucionales, es, pese a sus debilidades, problemas y objeciones, el mejor sistema que se ha creado para resguardar la supremacía de la norma fundamental, para controlar a los demás poderes del Estado y para defender los derechos fundamentales, es decir es el mejor defensor del orden constitucional y democrático.

Según Castillo Córdova², las 3 razones que justifican la aparición de una jurisdicción constitucional, y de un órgano encargado de ejercerla son: i) Que, a través de un órgano de control de constitucionalidad será posible asegurar la efectiva vigencia de la Constitución, ii) Que, a través de un órgano de la jurisdicción constitucional será posible afianzar una democracia, no sólo formal, sino material, es decir, aquella que se define según los valores y principios que subyacen de la Constitución, en particular la vigencia de los derechos fundamentales; y, iii) Que, a través de un órgano que interpreta la Constitución como máximo órgano de decisión en los asuntos de relevancia constitucional, permitirá mantener en lo posible el consenso en cada momento histórico.

¹ CARPIZO, Jorge. *“El Tribunal Constitucional y sus límites”*, Editorial Jurídica Grijley, 1ra. Edición, Lima. 2009, p. 1.

² CASTILLO CORDOVA, Luís, *“El Tribunal Constitucional y su dinámica jurisprudencial”*, Palestra, 1ra. Edición, Lima, 2008, p. 57.

La jurisdicción constitucional defiende y preserva la constitucionalidad, entendida esta como el vínculo de armonía y concordancia plena entre la Constitución y las demás normas que conforman el sistema jurídico que esta diseña³. Al respecto, Víctor Ortecho Villena⁴ señala que “la constitucionalidad como expresión jurídica, política y social es la expresión de la supremacía de la Constitución”.

Por su parte Iván Escobar Fornos, constitucionalista nicaragüense, define la Justicia Constitucional por su objeto en los siguientes términos: “La Justicia Constitucional tiene por objeto garantizar la supremacía de las normas, derechos y principios de la Constitución. Para tal efecto recurre a los procesos constitucionales: Inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, el amparo, el habeas corpus y el habeas data, tribunal Constitucional”⁵.

Asimismo, Néstor Pedro Sagüés ha señalado que para que existe un sistema de control constitucional es necesario que exista: i) una

³ BLUME FORTINI, Ernesto. El control de la constitucionalidad. Lima: Ersá, 1996.

⁴ ORTECHO VILLENA, Víctor. Jurisdicción y procesos constitucionales. Lima: Rodhas, 2000.

⁵ CASTRO RIVERA, Edwin y Sergio J. CUAREZMA TERÁN. (Directores). A 21 años de la Constitución Política: Vigencia y desafíos. Managua, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), 2008, pág. 96.

Constitución total o parcialmente rígida, y ii) un órgano estatal independiente y autónomo que desarrolle el control de constitucionalidad con facultad decisoria dentro de plazos determinados⁶.

2.2. El Tribunal Constitucional.

Regularmente se considera a Hans Kelsen como el creador del Tribunal Constitucional, un órgano distinto, tanto del poder político como de la jurisdicción ordinaria, especializado para el control de la constitucionalidad normativa⁷.

También suele afirmarse que este órgano, que realiza la declaración de inconstitucionalidad de las leyes en un proceso especial dirigido a este fin y con efectos derogatorios, fue instalado por primera vez en Austria. Quizá por eso el control constitucional realizado a través de este mecanismo suele ser denominado también “sistema austríaco”⁸.

⁶ SAGÜÉS, Néstor Pedro, “Derecho procesal constitucional”, Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 30.

⁷ BADENI, Gregorio. Nuevas perspectivas en el derecho constitucional. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires. P. 294.

⁸ BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Derecho Constitucional comparado. Editorial del Fondo de la Cultura Económica. México D. F. P. 167.

2.2.1. Características del Tribunal Constitucional.

Para el tratadista Javier Pérez Royo⁹ las características de los tribunales constitucionales son las siguientes:

- Es un órgano único, en el que se concreta la interpretación definitiva y vinculante de la Constitución.
- Es un órgano jurisdiccional, aunque no integrado en el Poder Judicial.
- Su competencia básica consiste en el control constitucional de las leyes.
- Sus competencias adicionales van en la misma dirección: protección de los derechos fundamentales, protección de la distribución territorial del poder y, protección de la división de poderes.

⁹ PÉREZ ROYO, Javier, *“Curso de Derecho Constitucional”*. Marcial Pons, Quinta Edición, Madrid - 1998. *Ob. Cit.*, p. 925.

2.2.2. Naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional.

2.2.2.1. El Tribunal Constitucional como órgano constitucional.

César Landa señala que, los órganos constitucionales cuentan con una configuración que les viene dada directamente por la propia Constitución, y cuyo reconocimiento no se limita a la simple mención de sus funciones o competencias, sino que en muchos casos la propia norma fundamental establece su composición, estructura, funciones, entre otros. En otras palabras, reciben de la Constitución todos los atributos esenciales de su condición y posición en el sistema constitucional. Sin embargo, esto no impide que el legislador pueda completar, a través de su ley orgánica, los elementos no esenciales o complementarios, y en muchos casos, estos órganos constitucionales están en la capacidad de emitir sus propias normas para regularse¹⁰.

¹⁰ LANDA ARROYO, César. *“Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional”*, Palestra Editores, Primera Edición, Lima – 2011. p. 17.

Conforme a la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la misma, conforme se señala en el artículo 202 le reconoce competencia al Tribunal Constitucional para: *“1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley”*.

Carpizo, explica esta supremacía bajo la diferencia de órganos constituidos primarios y secundarios, señalando lo siguiente: “Los poderes constituidos creados por la Constitución son: el poder revisor de ésta y el tribunal constitucional, donde ellos existan, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los órganos constitucionales autónomos. No obstante, ellos no tienen la misma jerarquía constitucional. (...) Todos son constituidos porque se crean en la Constitución, pero los primarios gozan de una jerarquía superior respecto a los secundarios, debido a la

naturaleza de sus funciones (...) en virtud de que pueden alterar su estructura, integración y funciones de los segundos, e incluso los pueden crear (...) El tribunal constitucional es jerárquicamente superior o goza de esa competencia superior a los poderes u órganos secundarios debido a que es quien controla la constitucionalidad de sus normas y actos. Si no gozara de jerarquía superior, el tribunal constitucional no podría revisar, declarar inválidos o anular los actos de los órganos secundarios”¹¹.

2.2.2.2. El Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional

Ferrer Mac-Gregor define al Tribunal Constitucional como el “órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental¹².

¹¹ CARPIZO, Jorge. *El Tribunal Constitucional y sus límites (...)*, Ob. Cit. pp. 29-30.

¹² FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “*Ensayos sobre derecho Procesal Constitucional*”, México, Porrúa y CNDH, 2004, p. 37.

En nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional no se ubica dentro de la estructura y organización del Poder Judicial; sino que le reconoce un régimen constitucional propio. Esto responde, a la necesidad de otorgarle mayor autonomía e independencia en relación con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y demás órganos constitucionales¹³ que son objeto de control; sin embargo ello no le niega naturaleza jurisdiccional, pues conforme a su artículo 202º , le reconoce la competencia para conocer en instancia única los procesos de inconstitucionalidad; en última y definitiva instancia las resoluciones judiciales denegatorias de los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y la acción de cumplimiento; y, finalmente, los conflictos de competencia.

2.2.2.3. El Tribunal Constitucional como órgano político

Alfonso Santiago señala que los órganos de control de la constitucionalidad “ejercen poder

¹³ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José. *La justicia constitucional europea ante el siglo XXI*. Madrid: Tecnos, 2002. p. 50.

político ya que hacen prevalecer su decisión sobre lo dispuesto por el Poder Ejecutivo o Legislativo” y que la imposición “frente a los otros detentadores del poder, es en realidad una decisión política”¹⁴.

Por su parte Leibhojz señalaba que “bajo cada litigio Constitucional se esconde una cuestión política susceptible de convertirse en un problema de poder”¹⁵.

2.3. El Tribunal Constitucional del Perú.

El Tribunal Constitucional peruano es definido por su Ley Orgánica como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales¹⁶.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional es “una institución de diálogo social y de construcción pacífica de la sociedad plural, pues

¹⁴ Citado por: Ricardo Toma, Víctor.” *Teoría del Estado y Derecho Constitucional*. 1ra Edición. Palestra Editores, Lima, 2005. p. 523.

¹⁵ LEIBHOLZ, Gerhard, “Problemas fundamentales de la democracia moderna”, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, p. 149. Citado por: LANDAARROYO, César. “Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional”, Palestra Editores, Primera Edición, Lima - 2011. p. 44.

¹⁶ Artículo 1º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

participa como un auténtico órgano con sentido social, estableciendo a través de su jurisprudencia, las pautas por las que ha de recorrer la sociedad”¹⁷.

2.3.1. Funciones y Atribuciones del Tribunal Constitucional

2.3.1.1. Competencias en los procesos constitucionales

Actualmente, el artículo 202 de la Constitución de 1993 establece que el Tribunal Constitucional del Perú cuenta con tres competencias establecidas taxativamente:

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento.
3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

¹⁷ STC N° 00048-2004-AI, Fj. 3 y 7.

Los procesos constitucionales, se clasifican, en atención al objeto de protección de cada uno de ellos, en tres grupos:

a) Procesos de tutela de derechos: Llamados también procesos constitucionales de la libertad, tienen por objeto la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, estos son: proceso de habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento (acción de cumplimiento).

b) Procesos de control normativo: Denominados también procesos constitucionales orgánicos, tienen por objeto proteger jurídicamente la primacía de la Constitución respecto a las normas que tienen rango de Ley, en el caso del proceso inconstitucionalidad, y de la primacía de la Constitución y de la ley respecto al resto de normas de jerarquía inferior a la ley, en el caso del proceso de acción popular.

c) Proceso de conflicto competencial: Que tiene por objeto la protección de las competencias que la Constitución y las leyes orgánicas atribuyen a los poderes del Estado, órganos constitucionales y a los gobiernos regionales y locales (municipalidades). Esta comprendido por el proceso de conflicto de competencias o de atribuciones.

2.3.1.2. Competencias exclusivas

En el Perú, son 3 las competencias exclusivas que ejerce nuestro Tribunal Constitucional:

1. Conocer y resolver en única y definitiva instancia, la acción de inconstitucionalidad;

1.1. Como órgano de control de la Constitución o de una norma constitucional.

1.2. como órgano de control de una reforma constitucional

1.3. como órgano de control de Tratados Internacionales

2. Conocer y resolver en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de los procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento.

En este sentido los Tribunales Constitucionales intervienen como última instancia en algunos procesos constitucionales. Lo interesante de este sistema es que, si una sentencia no es seleccionada, cualquier magistrado de la Corte Constitucional o el Defensor del Pueblo pueden

insistir en su revisión, lo que no obliga a la Sala de Selección a elegir la sentencia para su revisión¹⁸.

2. Conocer y resolver los conflictos de competencia.

El artículo 202 inciso 3° de la Constitución, señala que corresponde al Tribunal Constitucional conocer los conflictos de competencia o atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a la ley. En cuanto a las instituciones entre las cuales se puede suscitar un conflicto competencias o de atribuciones, el artículo 46 de la LOTC, precisa que puede darse entre los poderes del Estado, entre los órganos constitucionales, entre éstos entre sí, entre los gobiernos regionales o municipales, entre el Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipalidades y entre éstos entre sí.

En cuanto a la clasificación de los procesos competenciales, la STC N° 006-2006- CC/TC ha señalado que pueden ser básicamente de dos tipos:

- i) El proceso competencial puro, que se produce

¹⁸ HUERTA GUERRERO, Luís Alberto, “El Tribunal Constitucional del Perú (Apuntes para una reforma de sus competencias)”. En Las tareas de la transición democrática. Serie: Democracia N° 01. Comisión Andina de Juristas, Lima. p.194.

cuando el conflicto de competencias se produce entre diversos niveles de gobierno; entre el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales; su marco normativo se encuentra en los artículos 191, 192 y 197 de la Constitución, Ley Orgánica de Gobiernos regionales, Ley Orgánica de Municipalidades y Ley de Bases de la Descentralización; y, ii) El proceso competencial de atribuciones, que se produce cuando se debe dirimir las competencias que les corresponde a los Poderes del Estado frente a los que les corresponde a diferentes Órganos Constitucionales.

Asimismo, el artículo 3 de la LOTC señala que en ningún caso se puede promover un proceso de esta naturaleza respecto a las funciones asignadas al TC, lo que resulta acertado, porque si se asumiera tal posibilidad, el TC se convertiría en juez y parte.

2.3.1.3. Competencias compartidas

2.3.1.3.1. El control difuso de las normas legales

En artículo 138 de la Constitución señala que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la

norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. Asimismo el artículo 14 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que: “De conformidad con el Artículo 236 (de la Constitución de 1979), cuando los magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera.

Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación. En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece.”.

Por su parte, el artículo 3 del Código Procesal Constitucional señala que: "Las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las normas, serán elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones judiciales en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no proceda medio impugnatorio alguno. En todos estos casos, los Jueces se limitan a declarar la inaplicación de la norma por incompatibilidad inconstitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, realizando interpretación constitucional, conforme a la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de menor jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso de acción popular. La consulta a que hace alusión el presente artículo se hace en interés de la ley".

2.3.1.4. Competencias no previstas e implícitas

Entre ellas tenemos:

- ✓ Proceso de inconstitucionalidad por omisión.
- ✓ Control de constitucionalidad de normas infralegales.
- ✓ El control previo de tratados.
- ✓ El control de los decretos que declaran estados de excepción.
- ✓ El control del procedimiento de reforma constitucional.
- ✓ El control constitucional de los proyectos de ley observados por el Poder Ejecutivo.
- ✓ El control constitucional a las convocatorias a consultas populares y plebiscitos.
- ✓ El control constitucional de la actuación de partidos políticos.

2.3.2. Votación y Publicación de las Decisiones del Tribunal Constitucional

Los sistemas de votación y publicación de las decisiones del Tribunal Constitucional se encuentran recogidas en el artículo 47 del Reglamento Normativo, en el cual se establecen los

siguientes tipos de resoluciones que pueden ser emitidas por el Tribunal Constitucional.

1. Sentencias.- Son las resoluciones por medio de las cuales se pone fin a los procesos constitucionales, a través de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. La sentencia debe contener las formalidades señaladas en los artículos 17, 34, 55 y 72 del Código Procesal Constitucional. Las sentencias expedidas por el Pleno deben ser firmadas por el número mínimo de magistrados exigidos por la ley, es decir, requieren de 5 votos. Los casos en los que el Pleno dicta sentencia son: las acciones de inconstitucionalidad, el conflicto de competencia, y el establecimiento o modificación de precedentes normativos y doctrina jurisprudencial.

En el caso de las sentencias expedidas por las Salas, deben contar con 3 votos conformes. En ambos casos, los efectos de la sentencia empiezan a regir desde el día siguiente a su notificación y, en su caso, al día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, independientemente de su publicación en la página web del Tribunal Constitucional.

2. Autos. - Son las resoluciones de carácter interlocutorio por medio de las cuales el Tribunal emite pronunciamientos en las causas que están sometidas a su conocimiento, es decir, son aquellas resoluciones que no resuelven el fondo del petitorio de la demanda. Por ejemplo, los autos que resuelven la

admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o del conflicto de competencia, los autos que declaran la improcedencia de la demanda en los demás procesos constitucionales elevados al Tribunal vía recurso de agravio constitucional, la indebida concesión del recurso de agravio constitucional, el recurso de queja, la acumulación de procesos y, los pedidos de aclaración, entre otros.

3. Decretos. - Son las resoluciones por medio de las cuales se impulsa el trámite del proceso. Estas resoluciones son firmadas por el Presidente del Tribunal o por delegación de éste, por los Presidentes de las Salas. A diferencia de las sentencias y los autos, los decretos no son publicados en la página web del Tribunal, a excepción de los decretos de avocamiento, que se dictan cuando uno o más magistrados han cesado en sus funciones, en cuyo caso el Presidente del Tribunal Constitucional, el de las Salas, o en su defecto el Magistrado más antiguo, según corresponda, emitirá decreto señalando al magistrado que se avoca al conocimiento de la causa, siempre que el cesado no haya votado.

2.3.4. Alcances sobre la Jurisdicción Constitucional en Legislación Comparada.

2.3.4.1. El tribunal constitucional en Alemania

El artículo 1° de la BVerfGG describe la situación jurídica del organismo diciendo que: "El Tribunal Constitucional Federal es un tribunal de la Federación, autónomo e independiente frente a los demás órganos constitucionales"¹⁹.

Este Tribunal tiene en la ley una doble configuración:

Como órgano Constitucional Está situado al mismo nivel que la Asamblea Federal, Consejo Federal y el Gobierno Federal. Además no está subordinado a ningún otro órgano estatal, por lo cual no depende organizatoriamente de ningún ministerio, no está sometido a ningún tipo de vigilancia sobre su personal ni a intervención estatal directa, elabora su propio presupuesto y además sus jueces tienen un estatuto peculiar distinto de los demás jueces federales.

¹⁹ Ley del Tribunal Constitucional Federal, del 16 de abril de 1951, art. 1.

Como Tribunal judicial El artículo 92 de la Ley Fundamental lo integra al Poder Judicial²⁰. Se han presentado algunas objeciones acerca del carácter de sus decisiones, ya que en ocasiones éstas son más políticas que jurisprudenciales, pero su carácter institucional de Tribunal es indiscutible ya que "mediante jueces imparciales, especialmente independientes (independencia judicial) decide vinculantemente y, en base a (sic) normas jurídicas, lo que es conforme a derecho en cada caso"²¹.

2.3.4.2. La Corte Constitucional en Italia

La Corte Constitucional no ha sido instituida para sustituir alguno de los otros órganos jurisdiccionales ya existentes, ni sustraer a éstos parte de las funciones que entran dentro de su competencia. La Corte Constitucional desarrolla su actividad sobre materias que hasta ahora estaban totalmente fuera del campo jurisdiccional, o bien se atribuían a la competencia de especialísimos órganos jurisdiccionales que actualmente ya no existen. La institución de la Corte Constitucional representa, por

²⁰ Ley Fundamental de la República Federal Alemana, art. 92.

²¹ SÁINZ MORENO, Fernando, "Tribunal Federal Constitucional Alemán". Boletín de Jurisprudencia Constitucional, Madrid, Nº 8, diciembre de 1981, pág. 606.

lo tanto, una extensión de la actividad jurisdiccional del Estado, extensión que caracteriza el progreso constante del ordenamiento jurídico en los tiempos modernos²².

Este órgano realiza una función de tipo negativo abrogativo- que obliga a anular una ley, no para sustituirla por una considerada políticamente más conveniente sino porque la misma contradice un canon constitucional que debe ser respetado. Esto es, una anulación por causas estrictamente jurídicas.

Para Pizzorusso, las normas de organización de dicho tribunal lo perfilan como un órgano que muestra junto con características propias de los órganos judiciales algunas otras peculiares de los de tipo parlamentario, como lo es el papel de mediador o árbitro en los conflictos de atribuciones: En este sentido resulta evidente la intención de los legisladores por establecer un órgano que estuviese en condiciones de garantizar el respeto efectivo de los derechos fundamentales del ciudadano- de los sujetos de derecho individuales o colectivos, en general- y que fuese, al tiempo, una instancia capaz

²² VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. El control de la constitucionalidad de la ley, Estudio de derecho comparado. México, Editorial Porrúa, S.A., 1978 págs. 72-73.

de desarrollar un papel arbitral en los conflictos entre órganos y entes constitucionales²³.

2.3.4.3. El Tribunal Constitucional de España

El Tribunal Constitucional se encuadra como una jurisdicción de naturaleza especial, pues el mismo no se encuentra ubicado dentro de la común organización judicial, sino que la Constitución de 1978, la cual le dio origen, lo sitúa como un órgano fuera de la estructura del mencionado poder. Es por ello que para algunos autores tales como Eduardo García de Enterría y Jesús González Pérez, el Tribunal viene a ser un superpoder o un verdadero cuarto poder, materialmente jurisdiccional pero distinto del Poder judicial estricto.

Así, se ha estimado que por no ser un Tribunal de carácter político sus actuaciones deben apartarse de cualquier consideración de ese tipo, ya que: Si bien es cierto aplica un cuerpo de Derecho - el ordenamiento constitucional- de contenido político, esto no impide su tratamiento exclusivamente jurídico. Tampoco es obstáculo el carácter político de

²³ PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de derecho Constitucional. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 3 Ed. 1. II, 1987. 3 y 4.

ciertos actos que deba controlar para que ese control sea un control jurídico y no político²⁴.

Por otra parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que²⁵:

1. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.
2. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.

Al respecto, Francisco Fernández Segado opina que: "Si, en efecto, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, no es el único sino, precisamente, sólo el "supremo". Y, en efecto, (...) la jurisdicción Constitucional no es, ni mucho menos, la única en aplicar los preceptos constitucionales (...) ya que, de hecho, sólo conocerá en exclusiva de los recursos directos de

²⁴ CAMPOS ARIAS, José Alberto y otros. 'La Corte Constitucional de Costa Rica'. San José. Seminario de graduación para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1983, pág. 400.

²⁵ Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España. Nº 2 del 3 de Octubre de 1979. Art. 1.

inconstitucionalidad, esto es, del control abstracto de normas legales”²⁶.

Igualmente se ha señalado que el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional, de carácter constitucional, independiente, único y exclusivo en su orden, y que va a tener como función la de -imponer y actuar las sanciones que correspondan en el orden constitucional, en garantía de la observancia de la norma jurídica²⁷.

2.3.4.4. La Corte Constitucional en Colombia

La Corte Constitucional de Colombia es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Fue creada por la Constitución de Colombia de 1991 e instalada por primera vez el 17 de febrero de 1992, inició con 7 miembros, elegidos de la forma señalada en el artículo 22 transitorio de la misma Constitución Política y desempeñaron su función hasta el día 28 de febrero de 1993. El primero de marzo de 1993, asumieron los nueve magistrados integrantes de la

²⁶ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, Ibid págs. 52-53.

²⁷ PÉREZ GORDO, Alfonso. El Tribunal Constitucional y sus funciones. Barcelona. Ed. Bosch, 1982, pág. 11.

corporación de forma definitiva para un periodo de ocho años como lo establece la Constitución en sus artículos permanentes. Hoy en día la Corte Constitucional colombiana, cuenta con nueve magistrados, que son elegidos para periodos de ocho años por el Senado, a partir de las ternas enviadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

La Ley N° 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, establece en su artículo 43° (Estructura de la jurisdicción constitucional) que: “La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de la Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

La Corte está conformada por tres salas:

Una sala plena que conoce y se encarga de las acciones de inconstitucionalidad (Sentencias “C”) y los asuntos de tutela que se vuelven sentencias de unificación (Sentencias “SU”). Conformada por nueve magistrados.

Una sala de revisión de tutelas, conformada por tres magistrados, que se encarga de las tutelas que han sido seleccionadas para revisión (Sentencias “T”), proferidos por los diferentes despachos judiciales.

Una sala de selección de tutelas, en donde dos magistrados se encargan de seleccionar los fallos de esta acción consagrada en el art. 86 C.N., que se llevarán a las salas de revisión.

2.3.4.5. El Tribunal de Garantías Constitucionales en Ecuador

Según lo estipulado en la Constitución de 2008, es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. Es un órgano autónomo e independiente de los demás órganos del poder público con jurisdicción a nivel nacional. Este órgano reemplazó al antiguo Tribunal Constitucional, de conformidad a lo dispuesto en la quinta disposición transitoria de la Constitución del 2008, con la cual todos los bienes del antiguo Tribunal se transfirieron a la Corte, así como su personal de funcionarios y empleados.

La Corte Constitucional está regulado en el segundo capítulo del Título IX de la Constitución que trata acerca de la supremacía constitucional, específicamente entre los artículos del 429 al 440. También por la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual

especifica la estructura de la administración de justicia constitucional. Este órgano se encuentra conformada por nueve miembros con título de jueces, los cuales duran por un período de nueve años, siendo renovados por tercios cada tres años.

2.3.4.6. Tribunal de Control de Constitucionalidad de Guatemala

El Tribunal de control de la constitucionalidad está integrado por cinco magistrados nombrados por la Corte Suprema, otros dos nombrados por el Presidente de la República y otros 2 por el Colegio de Abogados.

Esta Corte no funciona de manera permanente, sino que integra en cada ocasión en que se hace valer la acción de inconstitucionalidad en los términos del art. 109° de la Constitución de Guatemala.

Según la Constitución, la Corte de constitucionalidad debe integrarse por 12 miembros de los cuales forman parte el Presidente y cuatro magistrados de la Corte Suprema y los demás por sorteo global que practicará la Corte Suprema entre los magistrados de la corte de apelaciones y del tribunal de lo contencioso administrativo, correspondiendo la

presidencia de la citada corte de constitucionalidad al Presidente de Corte Suprema de Justicia. A esta Corte también le corresponde el conocimiento de los recursos, que se interpongan contra las leyes o disposiciones gubernamentales.

En lo que se refiere a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, de acuerdo al modelo austriaco, cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad total de una ley esta quedará sin vigor, y si fuese parcial quedará sin vigor la parte respectiva. De lo anterior podemos deducir y concluir que en el sistema guatemalteco existe, al menos en teoría, una amplia gama de instrumentos protectores de los derechos fundamentales, uno de carácter específico como lo es el juicio de amparo y los otros de carácter indirecto, como el planteamiento prejudicial de la inconstitucionalidad ante un tribunal especializado.

2.4. Límites al Principio de Autonomía Procesal

Los límites pueden ser de dos tipos: formales y materiales. Los límites formales están establecidos en el derecho objetivo, es decir, en las normas jurídicas; mientras que los límites materiales se expresan en la jurisprudencia constitucional en la medida en que desarrolla los vacíos procesales de las normas. Por tanto, es posible

afirmar que *prima facie* los límites materiales se encuentran en función de los límites formales.

2.5.1. Límites formales

2.5.1.1. La Constitución y las leyes.

Si bien la autonomía procesal le permite al Tribunal Constitucional integrar los vacíos o deficiencias que presenta la normatividad que regula los procesos constitucionales, dicha autonomía no supone ampliar las competencias que le han sido constitucional y legalmente conferidas reformándolas o contradiciéndolas, por cuanto ello es tarea soberana del legislador. Este límite ha sido concebido como una manifestación del principio de separación de poderes, toda vez que el Tribunal no podrá interferir, en el ejercicio de su autonomía procesal, en la esfera de competencias de otro órgano o poder del Estado, en particular del Poder Legislativo²⁸.

El primero de estos lo encontramos en el artículo 43 de la Constitución que establece lo siguiente: “La

LANDAARROYO, César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú. En Anuario De Derecho Constitucional Latinoamericano. Año XV, Montevideo, 2009, p. 277-310, ISSN 1510-4974. p. 304.

República del Perú se organiza según el principio de separación de poderes”. Este apartado condiciona al Tribunal Constitucional a no ampliarse las competencias que le han sido conferidas por la Constitución. El ejercicio que haga este Colegiado de su autonomía procesal “no supone una invasión a la competencia legislativa del Congreso de la República, en la medida que este sigue conservando su facultad para dictar leyes que pueden incidir en el objeto sobre el cual el Tribunal Constitucional ha establecido reglas procesales²⁹.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional no podrá apartarse de aquellas normas constitucionales y legales en que se han establecido los principios fundamentales de los procesos constitucionales, como son el artículo 200.º de la Constitución, el Código Procesal Constitucional —ley N° 28237— y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional —ley N° 28301—, pero sí interpretarlas e integrarlas si es necesario³⁰.

²⁹ LEÓN VÁSQUEZ, Jorge, “El Tribunal Constitucional y la configuración de su Derecho Procesal”. En: Justicia Constitucional. Año II, N° 4, Lima, Palestra, 2006, p. 53.

³⁰ LANDA ARROYO, César. Ob. Cit. p. 305.

2.5.1.2. Los Tratados Internacionales.

En ejercicio de su autonomía procesal, el Tribunal Constitucional no está facultado para limitar o restringir el alcance que los tratados internacionales reconocen a los procesos constitucionales, sino, por el contrario, para cumplirlos y desarrollarlos en caso de vacío o deficiencia de sus disposiciones y resoluciones. En particular, las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, como lo es el de acceder a un recurso sencillo y rápido para la tutela de derechos fundamentales, constituyen también un parámetro de interpretación que deberá observar el Tribunal Constitucional en el ejercicio de su labor jurisdiccional³¹.

2.5.1.3. La vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución: artículo II del Título preliminar del Código Procesal Constitucional

El Artículo II del Título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que: “Son fines esenciales de los procesos constitucionales

³¹ Ibídem. P. 306.

garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”.

El Tribunal Constitucional está llamado a garantizar que la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución no cedan ante la ausencia o la deficiencia de normas procesales. Es así que el sustento de la institución opera también como su límite, puesto que el Tribunal Constitucional está obligado a expresar las razones que justifican, en el marco de un caso concreto, la necesidad de recurrir al principio de autonomía procesal, con lo cual debe poner en evidencia los valores y principios constitucionales que orientan y legitiman su labor³².

2.5.1.4. El reconocimiento de los principios procesales: artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional

El Artículo III del Título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que: “Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso,

³² Ibidem. P. 306.

gratuidad en la actuación del demandante, economía, intermediación y socialización procesales”.

Este límite ha sido recogido en una de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional (resolución de admisibilidad recaída en el expediente N° 020-2005-AI, de fecha 8 de agosto de 2005). En dicha resolución se afirma “[...] la naturaleza del Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional, sin que ello suponga negar las singularidades de la jurisdicción constitucional y los principios materiales que la informan” (fundamento 3).

2.5.2. Límites Materiales.

2.5.2.1. Principio de Subsidiariedad.

Es decir que el Tribunal Constitucional, al encontrarse frente a una laguna o defecto en el proceso constitucional, tendrá que recurrir a la aplicación supletoria e integración de los códigos procesales afines a la materia en controversia, y solo en el caso de que estas resulten incompatibles con

los fines de los procesos constitucionales, se verá facultado para crear una nueva regla procesal³³.

2.5.2.2. Los principios de razonabilidad y proporcionalidad

En el Estado constitucional de derecho, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, previstos en el artículo 200 de la Constitución³⁴, son aplicables a todo el ordenamiento constitucional y, por ende, limitan también la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Dichos principios exigen que la configuración autónoma del proceso se justifique plenamente en los fines que el Tribunal Constitucional persigue garantizar, y presuponen para dicho órgano constitucional la necesidad de evaluar: a) si la aplicación del principio de autonomía procesal es idónea para conseguir el fin constitucional que se pretende con tal medida; b) si existe una auténtica necesidad de aplicar dicho principio, y c) si el grado de libertad que asume el

³³ CÓRDOVA MEDINA, Pablo Alexander. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional y procesos constitucionales. Gaceta Constitucional N° 45. p. 323.

³⁴ Artículo 200° de la Constitución Política del Perú: "...Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo...".

Tribunal Constitucional en la configuración de su derecho procesal es proporcional a los fines que persigue³⁵.

2.5.2.3. El Principio de Interdicción de la Arbitrariedad

Si bien la Constitución no ha establecido expresamente este principio, bien puede desprenderse de su artículo 45°, que señala: El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.

Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que dicho principio tiene un doble significado:

[...] a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho. b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de

³⁵ LANDA ARROYO, César. Ob. Cit. p. 308.

base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo (STC, expediente N° 0090-2004-AA/TC, fundamento 12.)

En consecuencia, en ejercicio de su autonomía procesal, el Tribunal Constitucional debe ejercer una labor acorde con los fines de los procesos constitucionales, cuidando de motivar adecuadamente sus resoluciones y procurando que estas sirvan como referente para los futuros procesos que deberá resolver³⁶.

En ese orden de ideas, si el Tribunal Constitucional incorpora reglas procesales sin fundamento y sin ser acordes a los fines de los procesos constitucionales, estaría vulnerando flagrantemente este principio. Es aquí donde el artículo II del Código Procesal Constitucional aparece también como un límite más a su aplicación, en sentido que no deberán incorporarse nuevas reglas procesales que no estén justificadas en razón a garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. “El Tribunal Constitucional está obligado a expresar las razones que justifican, en el

³⁶ RODRÍGUEZ-PATRÓN. Ob. Cit, p. 155-156

marco de un caso concreto, la necesidad de recurrir al principio de autonomía procesal; con lo cual debería poner en evidencia los valores y principios constitucionales que orientan y legitiman su labor³⁷.

2.5.2.4. El Debido Proceso

El proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia», a lo cual contribuyen «el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal³⁸. En este sentido, dichos actos sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y son condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial³⁹.

³⁷ LANDA ARROYO, César. Ob. cit., pp. 91-92.

³⁸ Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafo 117.

³⁹ Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafo 118.

El Debido Proceso está contemplado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, como un principio – derecho de la función jurisdiccional.

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la persona humana deben ser los criterios inspiradores de la interpretación y aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho. En la estructura normativa, los Derechos Fundamentales aparecen consagrados en la Constitución cobrando prevalencia sobre los demás derechos adjetivos que complementan la vida en sociedad del hombre.

Así derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de pensamiento, participación, intimidad y los derechos económico – sociales son la piedra angular sobre la cual descansa la superestructura jurídica de las democracias. Los derechos fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre ya realizado y al mismo tiempo son el presupuesto para que este se reconstruya continuamente a través del ejercicio individual de las libertades por parte de todos

En buena cuenta, el debido proceso supone el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales y a su vez constituye un verdadero límite a la regulación del poder estatal en una sociedad democrática⁴⁰.

De este modo “el término de autonomía procesal no puede ser utilizado para crear caos en el proceso de manera que se generen nuevas reglas procesales que lo desnaturalicen, puesto que el proceso se rige por reglas que deben ser cumplidas, garantizando así el derecho de toda persona al debido proceso y a la tutela procesal efectiva con incidencia en los otros derechos fundamentales, afirmar lo contrario sería colocar el concepto de autonomía procesal como sinónimo de desorden, rompiendo el proceso⁴¹.

40 Cf. Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de junio de 2005, párrafo 78.

41 STC Exp. N° 03674-2007-PC/TC Fundamento de Voto 4 del Magistrado Vergara Gotelli.

2.6. Labor Interpretativa del Tribunal Constitucional como manifestación del Principio de Autonomía Procesal

Son muchas las manifestaciones del Principio de Autonomía Procesal, así como de naturalezas muy diversas, como el “amparo contra amparo”⁴², la conversión de un proceso constitucional en otro⁴³, el recurso de apelación por salto⁴⁴, entre otras instituciones creadas o importadas por el Tribunal Constitucional, en aras de la

⁴² En el Exp. N° 4853-2004-PA/TC en el que el Tribunal Constitucional desarrolla las reglas de procedencia del “amparo contra amparo” y del recurso de agravio constitucional a favor del precedente. En dicha sentencia se establece que el fundamento jurídico para admitir la procedencia del “amparo contra amparo” se encuentra en el artículo 202, inciso 2 de la Constitución, que determina que el proceso de amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular, contrario sensu, si la decisión judicial vulnera el debido proceso o la tutela procesal efectiva no tendría el estatus de constitucional, en consecuencia, debe admitirse un nuevo amparo frente a la resolución infractora.

⁴³ Esta debe aplicarse cuando la pretensión del demandante no concuerda con el proceso constitucional de la libertad elegido, es decir, es la situación en que el petitorio solicitado no concuerda con la vía procedimental elegida; por lo que el Tribunal Constitucional, con el objeto de proteger de manera adecuada los derechos de las personas, procede a convertir un proceso constitucional en otro. STC Exp. N° 00105-2010-Q/TC, f. j. 5. 22; STC Exp. N° 05761-2009-HC/TC, f. j. 25.

⁴⁴ Podemos definir al recurso de apelación por salto como el instituto procedimental mediante el cual se podrá verificar si lo dispuesto por el Tribunal Constitucional ha sido estrictamente cumplido en todos sus extremos y que, además, se erige como la vía más acorde a los principios de dignidad de las personas, cosa juzgada, plazo razonable y de la ejecución de las resoluciones judiciales. CÓRDOVA MEDINA, Ob. Cit. p. 330.

“omnipotencia” del principio antes mencionado, no obstante es pertinente al objeto de estudio de la presente investigación, la aplicación de la autonomía procesal al caso concreto en el momento de hacer la labor de interpretación correspondiente de las normas procesales o sustantivas, interpretación que encuentra sus límites en las instituciones y principios antes mencionados y que de no ser respetados, devienen en excesos o arbitrariedades cometidos paradójicamente por el supremo intérprete de la Constitución.

Mijail Mendoza señala que “la novedad de incorporar la autonomía procesal del Tribunal Constitucional yace en que, a diferencia de los jueces ordinarios del Poder Judicial —que se encargan, en principio, solo de aplicar la ley a través de subsumir el hecho en una norma y su independencia está garantizada por su subordinación a la ley—, en los procesos constitucionales los jueces especiales y en última instancia el Tribunal Constitucional se encargan de controlar a la ley y darle el sentido interpretativo, inaplicarla o dejarla sin efectos de manera particular o general, conforme a la norma suprema. Esto solo es posible en la medida en que la autonomía procesal le otorga al Tribunal Constitucional la capacidad para crear normas procesales, su reglamento y/o sentencias vinculantes, para la consecución de los fines de los procesos constitucionales”⁴⁵.

Señala Quiroga León que la labor interpretativa del Tribunal Constitucional supone un examen abstracto de la norma

45 MIJAIL Mendoza: “La autonomía procesal constitucional”, en Justicia Constitucional, año II, N°4, julio-diciembre, Lima, 2006, p. 99.

cuestionada de constitucionalidad, en donde el referente constitucional –a través del análisis de subsunción– determinará si la misma es compatible con los parámetros establecidos por la Carta Magna, incluyendo sus principios generales y valores intrínsecos a la misma. Corresponde al Tribunal Constitucional la interpretación de la Constitución como intérprete auténtico de la misma, en tanto que corresponde a los jueces del Poder Judicial la interpretación auténtica de la ley en general. El Tribunal Constitucional no es ni debe ser un tribunal de legalidad, lo que está reservado para la Corte Suprema de Justicia de la República y sus órganos jerárquicamente dependientes en materia jurisdiccional.

Sin embargo, en los últimos años dicha actividad de interpretación constitucional ha sido desnaturalizada debido a factores eminentemente políticos, cuya causa originaria se puede encontrar en el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República⁴⁶.

En ese sentido, un magistrado del Tribunal Constitucional debe ser, jurista que a través de la ciencia constitucional y de sus cualidades humanas pueda aportar sus conocimientos del derecho y su experiencia frente a las causas, manteniendo neutralidad, incorruptibilidad y claridad en sus opiniones. Solo así el Tribunal Constitucional estará en la capacidad de dar una respuesta

⁴⁶ QUIROGA LEÓN, Aníbal. Los excesos del Tribunal Constitucional peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución. Estudios Constitucionales, vol. 3, núm. 2, Santiago de Chile. 2005, p 480.

razonada, justificada y coherente ante los problemas que se generen como consecuencia de los vacíos o deficiencias de la ley procesal⁴⁷.

⁴⁷ LANDA ARROYO, César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú. En Anuario De Derecho Constitucional Latinoamericano. Año XV, Montevideo, 2009, p. 277-310, ISSN 1510-4974. p. 292.

**CAPÍTULO
III
Procesos
Constitucionales de
Tutela de Derechos
Fundamentales**

3.1. Procesos Constitucionales de Tutela de Derechos Fundamentales

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

La convención se está refiriendo a lo que en nuestro país conocemos como las acciones de garantía, ahora denominados procesos: Hábeas Corpus, Proceso de Amparo, Hábeas Data y Proceso de Cumplimiento, y es que se trata de un recurso sencillo no por la simpleza de su contenido, sino por la urgencia que amerita su tramitación y resolución al salvaguardar derechos de índole fundamental, tan inherentes a la dignidad misma del ser humano por su condición de tal.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los procesos constitucionales de tutela de derechos cuentan con dos funciones esenciales, una subjetiva, destinada a tutelar los derechos fundamentales y otra objetiva, cuyo afán es contribuir a clarificar un litigio o una duda constitucional⁴⁸.

⁴⁸ BENDA, Ernesto. La Garantía Constitucional de los Derechos Fundamentales. Alemania, España,

Profundizando respecto a los procesos constitucionales de garantía, el artículo 200 de nuestra Constitución Política establece que son garantías constitucionales:

“1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular.

3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el Artículo 2º, incisos 5) y 6) de la Constitución

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y

resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.

Por su parte el Código Procesal Constitucional regula separadamente a los procesos constitucionales de garantía y a los procesos orgánicos (Acción de Constitucionalidad, Acción Popular y Proceso Competencial), siendo que en su artículo 2 estatuye lo siguiente:

Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. El proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo.

3.1.1. Hábeas Corpus

De acuerdo al artículo 200 de la Constitución Política del Perú de 1993, la acción de Hábeas Corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Es una institución cuyo objetivo consiste en proteger la libertad personal, independientemente de la denominación que recibe el hecho

cuestionado (detención, arresto, prisión, secuestro, desaparición forzada, etc⁴⁹.

Por su parte el artículo 24 del Código Procesal Constitucional establece que procede el Hábeas Corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente conforman la libertad individual:

1) La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.

En ese sentido “el derecho a la vida se prolonga en el derecho a la integridad física y moral. En efecto, el reconocimiento y defensa que el texto constitucional consagra a la vida humana, no supone llana y elementalmente la constitucionalización del derecho a la mera existencia, sino que abarca la responsabilidad de asegurar que ésta se despliegue con dignidad. Por ende, necesita y exige condiciones mínimas, entre las cuales ocupa lugar preferente el resguardo de la integridad humana en sentido lato”⁵⁰.

La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02333-2004-HC, Caso Fronda Crespo, respecto a la integridad, desarrolla los tres ámbitos

⁴⁹ QUIROGA LEÓN. Aníbal. Código Procesal Constitucional Comentado. Tomo I. Edit. Gaceta Jurídica. 1era Edición. Diciembre de 2015. P. 107.

⁵⁰ ÁLVAREZ CONDE, Enrique Curso de Derecho Constitucional. Vol. I. Madrid: Tecnos. 1999, Pág. 334

correspondientes a la integridad física, psicológica y moral, expresando lo siguiente lo siguiente:

“La integridad física presupone el derecho a conservar la estructura orgánica del ser humano; y, por ende, a preservar la forma, disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en general, la salud del cuerpo.

La afectación de la integridad física se produce cuando se generan incapacidades, deformaciones, mutilaciones, perturbaciones o alteraciones funcionales, enfermedades corpóreas, etc.

La indemnidad corporal está sujeta, como regla general, al principio de irrenunciabilidad; vale decir, que la Constitución no avala ni permite las limitaciones físicas voluntarias, salvo casos excepcionales. En ese sentido, la persona tiene la responsabilidad de mantener incólume su integridad y, por consiguiente, de no atentar contra su propia estructura corpórea.

Los actos de disposición del cuerpo sólo son admisibles cuando surge una exigencia ante un estado de necesidad, una razón médica o motivos de humanitarismo (pérdida de un miembro u órgano para salvar el resto de la estructura corpórea, una gangrena o la donación de un órgano para preservar una vida ajena).

Al respecto, el artículo 6° del Código Civil –precepto que complementa el mandato constitucional– prohíbe los actos de disposición del propio cuerpo cuando ocasionan una disminución permanente del mismo o, en todo caso, cuando sean contrarios al orden público o a la buenas costumbres.

En virtud de ello, la persona sólo puede disponer de aquellas partes de su cuerpo que, al ser despojadas o separadas, no ocasionen una disminución permanente de su integridad física. Por ende, cabe la posibilidad de que la persona pueda ceder todas aquellas partes, sustancias o tejidos que se regeneren, siempre que ello no atente gravemente contra su salud o ponga en peligro su vida; tales los casos del corte del cabello, la donación de sangre, etc.

El derecho a la integridad moral defiende los fundamentos del obrar de una persona en el plano de la existencia y coexistencia social.

Dichos fundamentos manifiestan el conjunto de obligaciones elementales y primarias que el ser humano se fija por mandato de su propia conciencia, y los condicionamientos que ella recibe a través de la educación y cultura de su entorno.

En efecto, la integridad moral se liga inescindiblemente al atributo de desarrollar la personalidad y el proyecto de vida en

comunidad conforme a la convicción personal (religión, política, cultura, etc.).

Debe aclararse que la integridad moral no implica la idea de algo extraño o superior a la persona para reconocer su existencia y defender su intangibilidad, ya que se funda en el libre albedrío. Empero, es obvio que estos fundamentos, en caso del obrar, no deben colisionar con el orden público.

En ese orden de ideas, el apartado h del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución prohíbe toda forma de violencia moral contra una persona.

El derecho a la integridad psíquica se expresa en la preservación de las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Por consiguiente, asegura el respeto de los componentes psicológicos y discursivos de una persona, tales como su forma de ser, su personalidad, su carácter, así como su temperamento y lucidez para conocer y enjuiciar el mundo interior y exterior del ser humano”⁵¹.

2) El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

⁵¹ STC Exp. N° 0233-2004-HC, caso Foronda Crespo, fj. 2.1, 2.2. y 2.3..

Al respecto el Tribunal Constitucional ha mencionado en el Exp. N° 000376-2003-HC/TC que *“si bien todo procesado goza del derecho fundamental a la no autoincriminación, una de cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculcado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso, en el correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta, ello no le autoriza para que mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso”*.

3) El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme.

Al respecto, Carlos Mesía Ramírez sostiene que “el exilio, el destierro y el confinamiento son métodos propios de dictaduras y regímenes que al margen de la Constitución y la ley imponen un orden que es desde todo punto de vista, la negación de los más elementales derechos de la persona.”⁵²

4) El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería.

5) El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.

⁵² MESÍA RAMÍREZ, Carlos. Exégesis del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, Lima, 2004. P. 209.

El Tribunal Constitucional sobre el asilo diplomático refiere que “es la tutela que se otorga a una persona perseguida por razón de sus ideas y/o actos de carácter político. Se ejecuta en las legaciones diplomáticas, naves, aeronaves o campamentos castrenses del Estado asilante”⁵³.

Por otro lado, el tribunal supremo peruano señala que “la extradición alude a un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo, por parte de un Estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de otro, a efectos de que sea enjuiciado o cumpla con la condena señalada, según haya sido su situación de procesado o condenado en la comunidad política de destino”⁵⁴.

6) El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad.

En este sentido ha cobrado mucha polémica el caso de la colocación de rejas o tranqueras, así el Tribunal Constitucional refiere que “la instalación de rejas como medidas de seguridad vecinal no es, *per se*, inconstitucional, si se parte de la necesidad de compatibilizar o encontrar un marco de coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho con la seguridad ciudadana como bien jurídico. Lo

⁵³ STC Exp. N° 02876-205-PHC/TC, caso Mallqui Laurence. Fj. 12

⁵⁴ STC Exp. N° 02876-2005-PHC/TC, caso Mallqui Laurence. Fj. 12

inconstitucional sería, en todo caso, que el mecanismo implementado o la forma de utilizarlo resulte irrazonable, desproporcionado, o simplemente lesivo de cualquiera de los derechos constitucionales que reconoce el ordenamiento”⁵⁵

Al respecto, Castillo Córdova sostiene que “Adicionalmente, sirven dos criterios para definir la constitucionalidad o no de la colocación de rejas en la vía pública. El primero de ellos es que la colocación de rejas no anule el ejercicio de otros derechos o bienes constitucionales (...). El segundo de los criterios es que el límite al ejercicio de la libertad de tránsito que de ahí se derive se ajuste al Principio de Proporcionalidad”⁵⁶.

7) El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite “f” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan.

8) El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la materia.

9) El derecho a no ser detenido por deudas.

⁵⁵ STC Exp. N° 03482-2005-PHC/TC, cso Brain Delgado. Fj. 20

⁵⁶ CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Tomo II, Palestra, 2006. p. 532.

10) El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República.

11) El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal “g” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución.

12) El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción.

13) El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.

14) El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada por el juez.

15) El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 99 de la Constitución.

16) El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada.

17) El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena.

También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio.

3.1.1.1. Clases de Hábeas Corpus

El Tribunal Constitucional en la *obiter dicta* de la STC- **2663-2003-HC/TC**, caso Mabel Aponte, establece varios tipos de hábeas Corpus los cuales mencionaremos a continuación:

i. El hábeas corpus reparador

Dicha modalidad se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato -juez penal, civil, militar-; de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad; etc.

En puridad, el hábeas corpus reparador representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida.

ii. El hábeas corpus restringido

Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o

incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, “se le limita en menor grado”.

Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.

“Su finalidad es evitar perturbaciones o molestias menores a la libertad individual que no configuren una detención o prisión”⁵⁷

iii. El hábeas corpus correctivo

Dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y

⁵⁷ SAGUÉS, Néstor. Hábeas Corpus. Edit. Astrea. 2da Edición. Buenos Aires. 1988. P. 207.

proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena.

En efecto, en el caso Alejandro Rodríguez Medrano vs. la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario y otro (Exp. N.º 726-2002-HC/TC), el Tribunal Constitucional señaló que:

Procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral. Bajo esta perspectiva, su finalidad no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estados de incomunicación, las condiciones de detención, de reclusión inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes. Como sostiene César Landa, este hábeas corpus sería extensible al caso de retención por violencia doméstica o familiar hacia las mujeres, menores de edad, ancianos y otros dependientes⁵⁸.

Es también admisible la presentación de esta modalidad en los casos de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado de un recluso de un establecimiento penitenciario a otro; y por la determinación penitenciaria de cohabitación en un

⁵⁸ LANDA, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Fondo Editorial de la PUCP. Lima. 1999. P. 152

mismo ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados.

iv. El hábeas corpus preventivo

Éste podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia.

Al respecto, es requisito *sine qua non* de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentran en proceso de ejecución; por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta.

v. El hábeas corpus traslativo

Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido.

“Se busca proteger la libertad o la condición jurídica del *status* de la libertad de los procesados, afectados por las burocracias judiciales [...]”⁵⁹.

Según García Belaúnde, “procede si se produjese mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso y la tutela judicial efectiva”⁶⁰.

vi. El hábeas corpus instructivo

Esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no sólo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición.

vii. El hábeas corpus innovativo

Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales

⁵⁹ LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Editorial Palestra. Lima 2003. pág. 116.

⁶⁰ GARCÍA BELAUNDE, Domingo. El Hábeas Corpus en América Latina. En REP N° 97, julio-setiembre. CEC. Madrid. 1997. P. 120 y ss.

situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante.

Al respecto, dicha acción de garantía “debe interponerse contra la amenaza y la violación de este derecho, aun cuando éste ya hubiera sido consumado”⁶¹.

viii. El hábeas corpus conexo

Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc.

Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados –previstos en el artículo 3° de la Constitución– entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados.

⁶¹DOMINGO GARCÍA Belaunde [*Constitución y Política*, Eddili, Lima 1991, pág.148]

3.1.1.2. Hábeas Corpus contra Resoluciones Judiciales

El Código Procesal Constitucional establece en el artículo 4.º que el proceso constitucional de Hábeas Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva, por lo tanto no procede cuando dentro del proceso que dio origen a la resolución judicial que se cuestiona *no* se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla o cuando habiendo sido cuestionada se encuentre pendiente de pronunciamiento judicial tal impugnación.

Por tanto, “en estos casos, el requisito habilitador de un pronunciamiento de fondo consiste en que la resolución judicial cuestionada haya adquirido firmeza por haberse agotado contra ella los medios impugnatorios que franquea la ley y estos hayan sido desestimados. De tal modo, cuando dentro del proceso que dio origen a la resolución que se cuestiona no se agotaron los recursos para impugnarla, debe declararse improcedente la demanda en razón a que el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo”⁶².

⁶² EXP. 0963-2013-PHC/TC. Caso Aurelio Eugenio Flores. Fj. 2.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que *“solo excepcionalmente quepa efectuar un control constitucional sobre una resolución judicial por afectación al principio de legalidad penal y, en concreto en aquellos casos en los que, al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juez penal se aparte del tenor literal del precepto o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema material de valores. En consecuencia, si en la justicia ordinaria se determina la culpabilidad o inocencia del imputado, determinando en el caso si se da el supuesto de hecho previsto en la norma y sobre la base de consideraciones de orden penal, de acuerdo con la alternativa que ofrezca la dogmática penal que se estime la más adecuada, la justicia constitucional, en cambio, se encarga de determinar si la resolución judicial cuestionada afecta a derechos constitucionales”*⁶³

“De ello se infiere que la admisión a trámite de una demanda de hábeas corpus que cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando:

a) Exista resolución judicial firme.

⁶³ Exp. N.º 2758-2004-PHC/TC, caso Bedoya de Vivanco, FJ N.º 8..

- b) Exista vulneración MANIFIESTA.
- c) Y que dicha vulneración agravie la libertad individual y la tutela procesal efectiva.

Por tanto, el hábeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando:

Los hechos denunciados no se encuentren directamente relacionados con el agravio al derecho de la libertad individual.

Del mismo modo, el hábeas corpus contra una resolución judicial es improcedente (rechazo liminar) cuando:

- a) La resolución judicial no es firme,
- b) La resolución judicial no vulnera en forma manifiesta el derecho a la libertad individual, o si
- c) No se agravia la tutela procesal efectiva.

Por otra parte el artículo 2º exige para la amenaza en hábeas corpus (libertad individual) la evidencia de ser cierta y de inminente realización, es decir que en cualquier momento pueda convertirse en una violación real”⁶⁴.

i) ⁶⁴ EXP. 05066-2008-PHC/TC LIMA, caso CÉSAR ALBERTO CAYCHO OCHOA. Fj.3

3.1.2. Proceso de Amparo

El amparo, institución procesal de origen mexicano, se introduce en el ordenamiento jurídico peruano en la Constitución de 1979 (artículo 295) se mantiene en la Carta Vigente de 1993 (artículo 200, inciso 2). Este proceso ha sido concebido como una garantía constitucional destinada a proteger los derechos constitucionales distintos a la libertad individual, vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona⁶⁵

De acuerdo a Abad Yupanqui, el amparo es “un proceso declarativo o de conocimiento, pues tiene como presupuesto la inseguridad o incertidumbre respecto a la violación de un derecho constitucional por parte de una autoridad, funcionario o persona, que debe ser aclarada por la respectiva sentencia. (...) Consideramos, más bien, que el proceso de amparo constituye una tutela privilegiada (...) cuya finalidad esencial es proteger eficazmente los derechos fundamentales. Se trata, en definitiva de un proceso especial que cuenta con un trámite procesal más acelerado⁶⁶

En 31 países del mundo en que se regula el amparo, nadie discute que este proceso tiene como fin tutelar derechos fundamentales, si bien el diseño de cada país puede tener matices. A diferencia de otros modelos, como el de España, cuyo recurso constitucional de amparo sirve para la tutela de

⁶⁵ CASTAÑEDA OTSU, Susana. Derecho Procesal Constitucional. Edit. Jurista Editores. Primera Edición. Lima Perú, marzo de 2003. P. 319.

⁶⁶ ABAD YUPANQUI, Samuel. “El proceso constitucional de amparo”. Gaceta Jurídica S.A. Lima, 2004. Páginas 95 y 96

un número limitado de derechos, el modelo peruano formalmente prevé la protección genérica de los derechos reconocidos por la Constitución⁶⁷.

Al respecto, Almagro Nosete, señala que “todo derecho fundamental requiere una garantía jurisdiccional para que pueda ser considerado un verdadero derecho, por lo que no es suficiente la existencia de un derecho, si no cuenta con una protección o garantías jurisdiccional o procesal. De esta suerte nos encontramos con las garantías del derecho, o lo que es lo mismo, con la institución como proceso que tutela a la institución”⁶⁸

El artículo 37 del Código Procesal Constitucional establece que el Proceso de Amparo procede en defensa de los siguientes derechos:

- 1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole;
- 2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa;
- 3) De información, opinión y expresión;
- 4) A la libre contratación;
- 5) A la creación artística, intelectual y científica;

⁶⁷ ETO CRUZ. Gerard. Código Procesal Constitucional Comentado. Tomo I. Edit. Gaceta Jurídica. 1era Edición. Diciembre de 2015. P. 404

⁶⁸ ALMAGRO NOSETE, José. “Constitución y proceso”. Bosch Editores. Barcelona, 1984.

- 6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones;
- 7) De reunión;
- 8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes;
- 9) De asociación;
- 10) Al trabajo;
- 11) De sindicación, negociación colectiva y huelga;
- 12) De propiedad y herencia;
- 13) De petición ante la autoridad competente;
- 14) De participación individual o colectiva en la vida política del país;
- 15) A la nacionalidad;
- 16) De tutela procesal efectiva;
- 17) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el proceso educativo de sus hijos;
- 18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales;
- 19) A la seguridad social;
- 20) De la remuneración y pensión;
- 21) De la libertad de cátedra;
- 22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución;
- 23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida;
- 24) A la salud; y
- 25) Los demás que la Constitución reconoce.

No obstante, debemos señalar, conforme al numeral 25 del artículo descrito que existen derechos implícitos que también son materia de protección del proceso de amparo, derechos no enumerados, tal como lo consagra el artículo 3 de la Constitución Política que expresamente señala:

“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.”

También debe tenerse en cuenta que el ámbito del proceso de amparo, a través del proceso de amparo, a través del artículo 3 de la propia Constitución permite fundamentar como derechos aquellos que derivan de la “dignidad del hombre”, bajo los conceptos de: los derechos naturales, los derechos morales y el clásico concepto de los “derechos del hombre”⁶⁹. En todo caso, basta con el elenco de los derechos fundamentales y constitucionales, para que en vía una interpretación *pro libertatis*, se expanda una enorme creación de derechos que hoy no están positivizados⁷⁰.

⁶⁹ PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Universidad Carlos III de Madrid/Boletín Oficial del Estado. Madrid. 1995. P. 21-38

⁷⁰ HERRENDORF, Daniel – VIDARTE CAMPOS, Germán. Principios de Derechos Humanos y Garantías. Edit. Ediar. Buenos Aires. 1991

Finalmente podemos expresar, en palabras de Robert Alexy que “los derechos ya no son concebidos como meras normas preceptivas, sino como principios que exigen un máximo desarrollo de optimización por parte de todos los órganos estatales de un Estado”⁷¹

3.1.2.1. Derechos Fundamentales Procesales

i. Tutela Procesal Efectiva

El derecho a la tutela jurisdiccional “es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”⁷²

De Bernardis define la tutela jurisdiccional efectiva como “la manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que

⁷¹ ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción hecha por Carlos Bernal Pulido. Centro de Altos Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2007

⁷² GONZALES PÉREZ, Jesús.- El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. España. Editorial Civitas.- Segunda edición, 1985.- Pág. 27

culmine con una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en su integridad”⁷³.

Nuestra Constitución Política peruana de 1993, acorde con lo expuesto, consagra la “tutela jurisdiccional” en el capítulo referente al Poder Judicial, en su artículo 139 inciso 3), al establecer: “Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.”

Germán Bidart Campos refiere que “personalmente utiliza y de manera frecuente, la denominación nueva del clásico y viejo derecho a la jurisdicción, no porque antes dejáramos de asignarle a éste el contenido amplio que se tiende desde el acceso a la justicia hasta la sentencia última, sino porque se expresa mejor en una fórmula clarísima cuál es el

⁷³ DE BERNARDIS, Luis Marcelo. La Garantía Procesal del Debido Proceso. Lima. Cultural Cusco S.A. –Editores, 1985

sentido que debemos atribuir a la jurisdicción, a la acción, al proceso en todas sus etapas, a su duración, y a la decisión que le pone término”⁷⁴

Nuestra Constitución Política de 1993, establece la Tutela Jurisdiccional Efectiva al señalar en su artículo 139 inciso lo siguiente:

“Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

El derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional no constituye en modo alguno una conquista del Estado Social de Derecho, ni siquiera del estado de Derecho. La organización del poder público de modo que quede garantizada la justicia le viene impuesto a todo Estado por principios superiores que el Derecho positivo no puede desconocer. El derecho a la justicia existe con independencia a que figure en las Declaraciones de Derechos Humanos y Pactos

⁷⁴ BIDART CAMPOS, Germán. Derecho de Amparo. Buenos Aires. Ediar.1961. Cap. I.

Internacionales, Constituciones y leyes de cada Estado. Como los demás derechos humanos es un derecho que los seres humanos tienen por el hecho de ser hombres. Los ordenamientos positivos se limitan a recogerle, como recogen otros principios del Derecho Natural, al lado de los principios políticos y tradicionales⁷⁵.

Es de precisar que los derechos al debido proceso constituyen la base sobre la que se asienta la tutela judicial y no judicial. En tal entendido se puede señalar que, en nuestro sistema constitucional se encuentran consagradas enunciativamente las garantías de un proceso litigioso, en función de lo cual toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional⁷⁶.

a. Juez natural.- Es una garantía de independencia e imparcialidad del juez frente a los demás poderes públicos, de conformidad con el Art. 139º, incisos 1 y 2, de los cuales se desprende:

⁷⁵ GONZÁLES PÉREZ, Jesús. El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid. Editorial Civitas, 1984. Pág. 22.

⁷⁶ APARICIO PÉREZ, Miguel. La aplicación de la Constitución por los jueces y la determinación del objeto del amparo constitucional, en RCEC, N° 3, Mayo-Agosto, CEC, Madrid, 1989, pp.71 y ss.; asimismo, Francisco Fernández Segado, La configuración jurisprudencial del derecho a la jurisdicción, en RGD, N° 600, Valencia, 1994, pp. 9236-9257.

b. Unidad judicial.- Supone la incorporación del juez en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional salvo excepciones como la jurisdicción militar, comunal y el arbitraje; pero sometidos en última instancia a la justicia ordinaria y constitucional. Dada la excepcionalidad de dicha jurisdicción sus competencias y resoluciones deben interpretarse restrictivamente, en función del respeto a los derechos fundamentales⁷⁷.

c. Carácter judicial ordinario.- No se pueden crear tribunales ni juzgados de excepción ni parajudiciales. En esa medida los tribunales administrativos del Poder Ejecutivo no pueden resolver afectando derechos constitucionales, sino, por el contrario, prefiriéndolos incluso antes que a la ley.

d. Predeterminación legal del órgano judicial.- La creación previa de cualquier órgano jurisdiccional debe darse en base a la ley del Congreso. No cabe su creación por un acto administrativo del Poder Ejecutivo. Asimismo, la ley debe establecer la competencia, jurisdicción e investidura del juez o tribunal. En consecuencia, el derecho al juez natural se expresa no tanto en el juez competente o del

⁷⁷ GARCÍA TOMA, Víctor. Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993, tomo II, Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, Lima, 1998, Pág. 543-461.

lugar, sino como aquel juez ordinario legalmente predeterminado por la ley. Porque, en última instancia del juez natural se infiere el derecho a un juez imparcial.

e. Acceso a la jurisdicción.- Es el derecho de poder ocurrir ante los jueces y tribunales, para obtener de ellos una sentencia o mandamiento judicial⁷⁸

Thompson entiende el “acceso a la justicia” como la posibilidad de toda persona – independiente de su condición económica o de otra naturaleza – de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos de acuerdo al ordenamiento de cada país, y de obtener atención a sus necesidades de determinación externa de situaciones jurídicas⁷⁹

El acceso efectivo a la justicia, según Capelletti y Garth, se puede considerar, entonces, como el requisito más básico – el derecho humano más fundamental – en un sistema legal igualitario

⁷⁸ GONZÁLES PÉREZ, Jesús. op. cit., Pág. 61.

⁷⁹ THOMPSON, José. Acceso a la Justicia y Equidad. BID e Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Primera Edición. San José – 2000. Página 25.

moderno, que pretenda garantizar y no solo proclamar el derecho de todos⁸⁰.

Shiappa Pietra entiende acceso a la justicia como un conjunto de atribuciones que asisten a toda persona, sin distinción de ninguna índole, para contar con asesoría legal, con asistencia letrada durante todo el curso del proceso judicial, alter judicial o administrativo del que sea parte o en el que tenga legítimo interés, y, en general con todos los recursos necesarios para lograr una efectiva tutela judicial, alter judicial o administrativa, de sus derechos, y una defensa justa⁸¹

f. a la instancia plural.- Aquí radica el derecho a recurrir razonablemente de las resoluciones judiciales, ante instancias superiores de revisión final; para lo cual, se ha consagrado la pluralidad de instancias, en el artículo 139º-6 de la Constitución; así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es la instancia de fallo final de las resoluciones denegatorias de las garantías constitucionales,

⁸⁰ Cappelletti, Mauro y Bryant Garth: El acceso a la justicia: La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. México: Fondo de Cultura Económica. 1996. Pág. 13.

⁸¹ SHIAPPA – PIETRA, Oscar. El Problema del Acceso a la Justicia en el Perú. En Acceso a la Justicia. REVILLA, Ana Teresa Editora. Oficina de Proyectos del Poder Judicial. Lima: 1997. Pág. 20.

según el artículo 202°-2. d. Principio de igualdad procesal.- En virtud del cual en todo proceso se debe garantizar la paridad de condiciones y oportunidades; entre las partes, los abogados, el fiscal, el abogado de oficio, en función del derecho fundamental a la igualdad ante la ley, del artículo 2°-2 de la Constitución⁸²

g. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.- Se trata de administrar justicia oportuna dentro de un plazo razonable. Si bien este es un típico concepto jurídico indeterminado: lo razonable será establecido por el juez en base a la ley, considerando el tipo de proceso en curso. En efecto, el carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse considerando las circunstancias de la causa, la complejidad del asunto, la conducta de los reclamantes y de las autoridades, así como las consecuencias de la demora⁸³.

h. Deber judicial de producción de pruebas.- El juez en base a su libertad razonable puede admitir o negar un medio de prueba propuesto; la denegatoria irrazonable de la aportación de prueba supone una violación a la tutela jurisdiccional. En todo caso, el

⁸² BIDART CAMPOS, Germán. Manual de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos Aires, 1985, Pág. 407.

⁸³ RUBIO LLORENTE, Francisco y otros, Derechos fundamentales y principios constitucionales, Ariel Derecho, Barcelona, 1995, Pág. 327

juez debe extremar sus cuidados para obtener las pruebas pertinentes, diligenciarlas y darles su mérito probatorio en la sentencia⁸⁴.

ii. Debido Proceso.

El artículo 37 en su numeral 16, el contemplar como derecho protegido por el hábeas corpus a la Tutela Procesal Efectiva, está abarcando a todos los derechos o garantías procesales, reconocidas en el artículo 139 de la Constitución, entre ellas el Debido Proceso, el cual consiste en un “derecho continente al interior del cual existen cierto número de derechos fundamentales que aseguran el reconocimiento y plenitud de un sujeto de derecho dentro de un procedimiento o proceso”⁸⁵.

En este sentido la garantía constitucional al Debido Proceso “surge regulando jurídicamente el ejercicio de la función jurisdiccional y, desde esa perspectiva, se sitúa, no como un mero instrumento jurisdiccional atemporal, acrítico y mecanicista sino, ante todo, como un sistema de garantías, (...) en orden a lograr la tutela judicial efectiva, y básicamente ordenando

⁸⁴ RUBIO LLORENTE, Francisco y otros, Derechos fundamentales y principios constitucionales, Ariel Derecho, Barcelona, 1995. Pág 348.

⁸⁵ MONROY GÁLVEZ, Juan. "Debido proceso y tutela jurisdiccional." En: "La Constitución comentada". Gaceta Jurídica S.A. Tomo II. Lima, 2005. Página 497.

a alcanzar un enjuiciamiento en justicia”⁸⁶. Los derechos⁸⁷ fundamentales legitiman la organización estatal, al constituir el mínimo de moralidad exigible a todo derecho.

El Tribunal Constitucional establece una distinción entre el Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva, señalando que “mientras que la tutela efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos”⁸⁸

⁸⁶ LORCA NAVARRETE, Antonio María. “El derecho procesal como sistema de garantías”. En: “Boletín Mexicano de Derecho Comparado”. Universidad Nacional Autónoma de México. N. 107. Distrito Federal de México, 2003. Página 532

⁸⁷ PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Edit. Dickinson. Universidad Carlos III. 2005.

⁸⁸ STC N° 8125-2005-HC/TC, FJ 6

CAPÍTULO
IV
EL AMPARO
CONTRA
RESOLUCIONES
JUDICIALES Y LA
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL

4.1. Amparo contra Resoluciones Judiciales

El artículo 200, inciso 2 de la Constitución Política del Perú señala que no procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular. No obstante, no debemos interpretar el referido enunciado como una prohibición a la procedencia de un amparo contra resolución judicial ya que justamente se ha establecido que no sería factible un amparo cuando la decisión contenida en una resolución judicial haya recaído en un proceso regular, en donde se haya afectado la tutela procesal efectiva, entendida como acceso a la justicia y debido proceso. A *contrario sensu*, una resolución judicial emanada de un proceso irregular vulneratoria de las garantías procesales antes establecidas si será materia de amparo.

Así el artículo 4 del Código Procesal Constitucional señala que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo.

En efecto, tal como lo establece el Código, será procedente un amparo contra resolución judicial, siempre y cuando se cumplan al menos los siguientes requisitos:

- La resolución judicial sea firme por ejecutoriada y no por consentida (artículo 4)
- Se refiera a la afectación o amenaza de derecho a la tutela procesal efectiva (artículo 4), caso Apolonia Collca.

- No haya vencido el plazo prescriptorio de treinta días contados a partir de la notificación de la resolución de cúmplase lo ejecutoriado (artículo 44)⁸⁹.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que “el amparo contra resoluciones judiciales requiere pues como presupuestos procesales indispensables, la constatación de *un agravio manifiesto* que comprometa seriamente el contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional, presupuestos básicos sin los cuales la demanda resultará improcedente. Es en aplicación de esta línea jurisprudencial que las dos instancias anteriores optan por rechazar liminarmente la demanda⁹⁰”.

El amparo contra resolución judicial “pretende dejar sin efecto o enervar lo resuelto por el Poder Judicial en un determinado proceso judicial ordinario, lo que a la larga implica el sacrificio del derecho fundamental a la cosa juzgada, motivo por el cual el amparo solo debe proceder ante situaciones muy excepcionales”⁹¹.

⁸⁹ LÓPEZ VIERA, José Reynado. Balotario Desarrollado de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Edit. Ubilex Asesores. Primera Edición. Lima, marzo 2017. P. 79.

⁹⁰ **Exp. N° 03275-2012-PA/TC-Santa. Caso Oswaldo Delgado García. Fj. 4**

⁹¹ LÓPEZ FLORES. Berly. Código Procesal Constitucional Comentado. Tomo I. Edit. Gaceta Jurídica. 1era Edición. Diciembre de 2015. P. 119.

Berly López señala que “hoy en día lo que resuelva el Poder Judicial en un proceso ordinario, sea éste penal, civil, laboral, comercial, contencioso, administrativo, etc, ya no es lo definitivo, inapelable o inmutable, características que otrora le eran asignadas a los autos o sentencias que expedía el Poder Judicial. Lo que ciertamente, equivale a decir que los asuntos judiciales ordinarios ya no acaban necesariamente en sede del Poder Judicial. Hoy en día el sistema de justicia del Estado Constitucional de Derecho, los grandes asuntos judiciales ordinarios acaban, por el contrario, en sede constitucional del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, con decisiones constitucionales que penetran o influyen decisivamente en la resolución final del caso ordinario. Lo que ciertamente equivale a afirmar que quien resulta vencedor en el amparo contra resolución judicial, *ergo*, resultará también vencedor en el proceso judicial ordinario que ha sido corregido o enmendado por una decisión constitucional. Ello por el Principio de Prevalencia de las sentencias constitucionales por sobre las sentencias ordinarias”⁹²

De lo anterior a *prima facie* se entiende claramente que el texto contenido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional al establecer expresamente el amparo contra resoluciones judiciales que vulneren la tutela procesal efectiva que comprende al acceso a la justicia y al debido proceso, estaría protegiendo solo derechos procesales y excluyendo de su margen tutelar a los derechos fundamentales de índole sustantivo.

⁹² IBIDEM. P. 119.

En relación a las resoluciones judiciales emanadas de procedimiento irregular, el aporte del caso Apolonia Collca es relevante pues dicha ejecutoria disgrega sobre el concepto de proceso regular. Remarca que la concepción de los jueces respecto a los procesos de amparo contra resolución judicial, aludía a que si un determinado proceso había sido desarrollado con estándares regulares ceñidos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, entonces no podía concebirse un amparo de esta naturaleza⁹³.

En el caso Apolonia Collca, Expediente N° 3179-2005-PA/TC, el Tribunal Constitucional recurrió a la interpretación extensiva del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, señalando que el amparo contra Resolución Judicial no sólo procede en caso de vulneración a la Tutela Procesal Efectiva, afirmando que la cláusula contenida en dicha norma es *numerus apertus* y no es taxativa, siendo que también forman parte del sistema de protección, los derechos fundamentales de carácter sustantivo o material, tales como el Derecho de Propiedad, al Trabajo, a la pensión, a la educación, al honor, etc.

Así, respecto al reconocimiento de los derechos fundamentales materiales como susceptibles, al igual que los derechos de orden procesal, de amparo contra resolución judicial en la sentencia de la referencia se estableció que:

“17. La vinculación de los derechos hacia cualesquiera de los poderes y, en general, órganos públicos, es lo que hemos venido en

⁹³ FIGUEROA GUTARRA, Edwin. El Proceso de Amparo: Alcances, Dilemas y Perspectivas. Publicado en Gaceta Constitucional No. 53. Mayo 2012. pp. 183-197

denominar eficacia vertical de los derechos fundamentales. Tal eficacia no es sino consecuencia de la naturaleza preestatal de los derechos fundamentales y, por tanto, del carácter servicial del Estado para con ellos, en tanto que la persona humana se proyecta en él como el fin supremo (art. 1 de la Constitución).

En ese sentido, tenemos dicho que dentro de estos sujetos obligados para con el respeto y protección de los derechos fundamentales se encuentran todos los poderes públicos, es decir, los entes que forman parte del Estado, independientemente de su condición de órgano constitucional, legal o administrativo, y los grados e intensidad de autonomía que para con ellos el ordenamiento haya podido prever.

Qué duda cabe de que dentro de esos poderes públicos vinculados con los derechos fundamentales se encuentra también el Poder Judicial y, con él, todas sus instancias jurisdiccionales, al mismo tiempo que sus órganos administrativos. La cuestión de qué derechos lo vinculan; bien cuando ejerce funciones jurisdiccionales; bien cuando ejerza las funciones administrativas propias a sus actividades de gestión, no puede sino responderse en los mismos términos que habitualmente se efectúa en relación con los demás poderes públicos. Todos los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. De modo que todos los derechos fundamentales (y no sólo los que conforman la tutela procesal) vinculan al Poder Judicial y, en ese sentido, demandan acciones u omisiones destinadas a garantizar el ámbito de la realidad que cada uno de ellos persigue tutelar.

No hay (no puede haber) un solo derecho fundamental que no pueda vincular a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Ello es consecuencia de su condición de poder constituido y, al mismo tiempo, del carácter servicial para con el ejercicio efectivo de los derechos de la persona humana, pues, al fin y al cabo, la tutela jurisdiccional que prestan "(...) emana del pueblo", conforme lo recuerda el artículo 138 de la Ley Fundamental.

18. La tesis según la cual el amparo contra resoluciones judiciales procede únicamente por violación del derecho al debido proceso o a la tutela jurisdiccional, confirma la vinculatoriedad de dichos derechos en relación con los órganos que forman parte del Poder Judicial. Pero constituye una negación inaceptable en el marco de un Estado constitucional de derecho, sobre la vinculariedad de los "otros" derechos fundamentales que no tengan la naturaleza de derechos fundamentales procesales, así como la exigencia de respeto, tutela y promoción ínsitos en cada uno de ellos.

En efecto, en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces del Poder Judicial no sólo tienen la obligación de cuidar porque se hayan respetado los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas cuya controversia se haya sometido a su conocimiento, sino también la obligación –ellos mismos– de respetar y proteger todos los derechos fundamentales al dirimir tales conflictos y controversias..."⁹⁴

⁹⁴ Exp. N° 03179-2004-PA/TC. Caso Apolonia Collca. Fj. 17 y 18

“...20. En definitiva, una interpretación del segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución bajo los alcances del principio de unidad de la Constitución, no puede concluir sino con la afirmación de que la competencia ratione materiae del amparo contra resoluciones judiciales comprende a todos y cada uno de los derechos fundamentales que se puedan encontrar reconocidos, expresa o implícitamente, por la Norma Suprema. En su seno, los jueces constitucionales juzgan si las actuaciones jurisdiccionales de los órganos del Poder Judicial se encuentran conformes con la totalidad de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. De modo que la calificación de regular o irregular de una resolución judicial, desde una perspectiva constitucional, depende de que éstas se encuentren en armonía con el contenido constitucionalmente protegido de todos los derechos fundamentales⁹⁵.

Como refiere Berly López, a esta interpretación llegó el Tribunal Constitucional tomando en consideración que la eficacia vertical de los derechos fundamentales vincula a todos los jueces su observancia y respeto absoluto. Esta premisa permitió concluir al tribunal que el juez constitucional podía incluso analizar el fondo del asunto bajo determinados criterios restrictivos y excepcionales⁹⁶.

Posteriormente el Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 01209-2006-PA/TC, caso Compañía Cervecería Ambev Perú S.A.C.

⁹⁵ IBIDEM. FJ. 20

⁹⁶ ⁹⁶ LÓPEZ FLORES. Berly. Código Procesal Constitucional Comentado. Tomo I. Edit. Gaceta Jurídica. 1era Edición. Diciembre de 2015. P. 121.

amplía su criterio respecto a la procedencia de amparo contra resoluciones judiciales señalando lo siguiente:

“...23. Como es sabido, hoy en día es pacífica tanto la doctrina como la propia jurisprudencia de este Tribunal al admitir el amparo contra decisiones judiciales. La cuestión que en todo caso, resta por definir y que aparece planteada en el presente caso, es si los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, sólo pueden afectar determinados derechos y no cualquiera como ocurre con cualquier otro funcionario, autoridad o incluso los particulares. Una interpretación aislada de lo que dispone hoy en día el artículo 4° del CPConst., pareciera en efecto, sugerir una respuesta restrictiva en el sentido anotado, generándose de este modo algunas incoherencias con el propio texto constitucional.

26. El Tribunal considera en este sentido, que la enunciación de una lista de derechos que el legislador ha establecido como atributos de la tutela procesal efectiva, para efectos de controlar la actuación de los jueces o incluso de los fiscales en el ámbito de sus respectivas competencias relacionadas con los procesos judiciales, no agota las posibilidades fácticas para el ejercicio de dicho control, ni tampoco quiere significar una lista cerrada de derechos vinculados a la cláusula general de la tutela procesal efectiva. Esto se desprende además de la propia lectura del artículo 4° del CPConst. que al referirse a la tutela procesal efectiva lo define como “aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos....”. Una lista enunciativa supone una referencia sobre los alcances de tal derecho, más no debe interpretarse como una lista cerrada de posibles infracciones, puesto que no se trata de un código de prohibiciones sino de posibilidades

interpretativas para su mejor aplicación. Resulta por tanto razonable pensar que con tal enunciación no se está estableciendo la imposibilidad de que otros bienes constitucionales, y no solo la tutela procesal, puedan también resultar afectados mediante la actuación del poder jurisdiccional del Estado.

27. Establecido lo anterior, debe precisarse sin embargo, que el amparo contra resoluciones judiciales no supone como tantas veces lo hemos afirmado, un mecanismo de revisión de la cuestión de fondo discutida en el proceso que lo origina, por lo que las violaciones a los derechos de las partes de un proceso deben expresarse con autonomía de dichas pretensiones. Es decir, debe tratarse de afectaciones del Juez o Tribunal producidas en el marco de su actuación jurisdiccional que la Constitución les confiere y que distorsionan o desnaturalizan tales competencias al punto de volverlas contrarias a los derechos constitucionales reconocidos y por tanto inválidas”.

Por otro lado, el aporte de la presente sentencia es la concepción del debido proceso como garantía no sólo procedimental sino también sustancial de los derechos, esto es la existencia y reconocimiento de un debido proceso formal y un debido proceso material:

“28. Unido a las consideraciones precedentes, debe también tenerse en cuenta que la dimensión sustancial del debido proceso abre las puertas para un control no sólo formal del proceso judicial sino que incide y controla también los contenidos de la decisión en el marco del Estado Constitucional. Es decir, la posibilidad de la corrección no sólo formal de la decisión judicial, sino también la razonabilidad y

proporcionalidad con que debe actuar todo juez en el marco de la Constitución y las leyes. Como lo ha precisado la Corte Constitucional Colombiana en criterio que en este extremo suscribimos: “El derecho al debido proceso es un derecho fundamental constitucional, instituido para proteger a los ciudadanos contra los abusos y desviaciones de las autoridades, originadas no sólo en las actuaciones procesales sino de las decisiones que adoptan y pueda afectar injustamente los derechos e intereses legítimos de aquellos.

29. Por nuestra parte, hemos expresado que a partir del debido proceso también es posible un control que no es sólo procesal o formal, sino también material o sustancial, respecto de la actuación jurisdiccional vinculado esta vez con la proporcionalidad y razonabilidad de las decisiones que emite en el marco de sus potestades y competencias¹. En este sentido hemos establecido que, “el debido proceso no es sólo un derecho de connotación procesal, que se traduce ...en el respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja, que no alude sólo a un proceso intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las modalidades de su tránsito, sino también como un proceso capaz de consentir la consecución de resultados esperados, en el sentido de oportunidad y de eficacia”².

30. El debido proceso en su dimensión sustancial quiere significar un mecanismo de control sobre las propias decisiones y sus efectos, cuando a partir de dichas actuaciones o decisiones se afecta de modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental (y no sólo

los establecidos en el artículo 4° del CPConst.). No se trata desde luego que la justicia constitucional asuma el papel de revisión de todo cuanto haya sido resuelto por la justicia ordinaria a través de estos mecanismos, pero tampoco de crear zonas de intangibilidad para que la arbitrariedad o la injusticia puedan prosperar cubiertas con algún manto de justicia procedimental o formal. En otras palabras, en el Estado Constitucional, lo “debido” no sólo está referido al cómo se ha de actuar sino también a qué contenidos son admitidos como válidos.

31. De este modo, también a partir de la dimensión sustancial del debido proceso, cualquier decisión judicial puede ser evaluada por el juez constitucional no sólo con relación a los derechos enunciativamente señalados en el artículo 4° del CPConst. sino a partir de la posible afectación que supongan en la esfera de los derechos constitucionales. En consecuencia el argumento de Backus, en el sentido de que el derecho a la libertad de empresa, comercio e industria no deben merecer análisis por este Colegiado al no tratarse de derechos incluidos en el ámbito de la tutela procesal efectiva, carece de sustento y en consecuencia se debe proseguir a su análisis.

4.2. La Seguridad Jurídica

Kelsen, define la seguridad jurídica como el hecho de que las decisiones de los Tribunales son previsibles hasta cierto grado y, por

ende, calculables, de suerte que los sujetos sometidos al Derecho pueden orientarse en su comportamiento⁹⁷.

La seguridad constituye una necesidad en la vida del ser humano, ante lo imprevisible o incierto; por lo cual la seguridad se torna en una necesidad del hombre que el Derecho intenta cubrir.

La Seguridad Jurídica como principio, es estructurado por Heinrich Henkel en cuanto legitimidad, desde la cual alude a un contenido valorativo, a un contenido de justicia expresado en términos de derechos y libertades que la conciencia humana e histórica considera que han estar suficientemente protegidos y realizados a la altura del tiempo en que se vive⁹⁸.

Desde el punto de vista de la seguridad personal sería el nivel más elemental de seguridad ciudadana, para el que todo individuo reclama protección del derecho y del Estado⁹⁹.

La relación entre seguridad jurídica y seguridad personal se fundamenta en dos elementos básicos

El primero de ellos es el orden público, ya que la seguridad jurídica en cuanto seguridad personal es consecuencia de la existencia de un cierto orden público que, aunque no es sinónimo de justicia, si es

⁹⁷ KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, 2 a edición, trad. de R. Vernengo, México, Porrúa, 1991, Pág. 260

⁹⁸ HENKEL, Heinrich. Introducción a la Filosofía del Derecho. Taurus. Madrid. 1968. Pág. 552

⁹⁹ ROLDÁN MARTÍNEZ, Luis. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Jesús A. Curso de Teoría del Derecho. Ariel Derecho. Barcelona. 1997. Pág. 200

conditio sine qua non para desarrollar la justicia en su plenitud y los distintos valores que en ella se concretan¹⁰⁰

El segundo concepto que fundamenta la seguridad jurídica en cuanto a seguridad personal, es la obediencia al derecho. Postula un lenguaje supuestamente neutro de validez de la norma, en el que la validez de la norma se confunde con su existencia, de modo que implica obligatoriedad¹⁰¹.

En este sentido el derecho está en la ley y solo en ella. El derecho está totalmente contenido dentro de los textos legales, de tal suerte que la tarea del jurista no consiste más que en extraerlo de ahí¹⁰²

La seguridad jurídica como elemento de certeza y seguridad debiendo ser entendida como certeza o conocimiento de la legalidad y, por tanto, como previsibilidad de las consecuencias jurídicas que se puedan derivar de una determinada actuación¹⁰³.

Pérez Luño, define la Seguridad Jurídica como: Un valor estrechamente ligado a los Estados de derecho que se concretan en exigencias objetivas de corrección estructural (formulación adecuada de las normas en el ordenamiento jurídico) y corrección funcional (cumplimiento del derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos de su aplicación). Junto con esa dimensión objetiva, la seguridad jurídica se presenta, en su acepción subjetiva, encarnada por la certeza del derecho, como la proyección

¹⁰⁰ ROLDÁN & SUÁREZ. Op. Cit. Pág. 200

¹⁰¹ KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Bosh, casa editorial. Barcelona. 1971. Pág. 49

¹⁰² HUSOON, Op. Cit. 184-196.

¹⁰³ ROLDÁN & SUÁREZ. Op. Cit. Pág. 203,

en las situaciones personales de las garantías estructurales y funcionales¹⁰⁴.

Entonces la Seguridad Jurídica es la exigencia de que los sistemas jurídicos contengan los instrumentos y mecanismos necesarios para que los sujetos obtengan una cierta garantía sobre cómo van a ser las normas jurídicas que rigen sus conductas, y cuáles serán las que se apliquen cada una de las mismas¹⁰⁵.

4.3. La Seguridad Jurídica y el Estado Constitucional

Dentro de un Estado Constitucional, la Seguridad Jurídica se erige como un principio fundamental dentro del contexto en que se desenvuelve el Estado; así en el Estado constitucional resulta eminentemente necesario que se establezcan los criterios que rigen para los integrantes del Estado, así como a la figura del Juzgador, lo cual impedirá el abuso por parte del Juzgador.

Cabe precisar que en el Estado Constitucional los derechos adquiridos no se reconocen atendiendo a parámetros formales de validez, sino que “se extienden a las condiciones de justicia (exigencia de buena fe, ausencia de dolo...) que determinaron la génesis de tales derechos y su mantenimiento¹⁰⁶

¹⁰⁴ PEREZ LUÑO, Antonio E. Seguridad jurídica. Editores GARZÓN VALDÉS Ernesto y LAPORTA J, Francisco en El derecho y la justicia Editorial Trotta S.A. 2000. Pág. 483.

¹⁰⁵ ESCUDERO ALDAY, Rafael. Positivismo y moral interna del derecho. Editorial Centro de estudios políticos y constitucionales. Madrid. 2000. Pág. 502.

¹⁰⁶ PÉREZ LUÑO. Op Cit. Pág. 487.

La Constitución, como la ley exige que sea interpretada en armonía con los progresos de la cultura jurídica y de los avances materiales. La voluntad de la norma no solo debe ir investigada en la relación con la época en que nació, sino teniendo en cuenta el momento en que se aplica. Hay que adaptar el precepto a las evoluciones vitales, de las que en última instancia, el derecho es forma¹⁰⁷.

Asimismo, desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales es de precisar que los derechos fundamentales son algo así como el indicador del nivel ético alcanzado, en un determinado momento y lugar, por la sociedad. Son un mínimo moral imprescindible sin cuya consecución no puede decirse que los sujetos cuenten con una mínima seguridad en sus vidas. En consecuencia, solo un sistema jurídico en el que éstos se garanticen y protejan puede decirse que produce Seguridad Jurídica¹⁰⁸.

4.4. La Cosa Juzgada

El Principio Procesal Constitucional de la cosa juzgada está contemplado en el artículo 139, inciso 13 de la Constitución, el cual a la letra señala lo siguiente: *“la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”*.

Por su parte el Tribunal constitucional ha definido a la cosa juzgada, entendiendo que “mediante el derecho a que se respete una

¹⁰⁷ PÉREZ, Luis Carlos. Tratado de Derecho Penal. Editorial Temis. 1978. T III., Pág. 113.

¹⁰⁸ ESCUDERO ALDAY, Rafael. Pág. 506

resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó”¹⁰⁹

Susana Castañeda precisa que cuando se señala que una resolución ha adquirido la calidad de cosa juzgada, equivale a decir a que no puede ser modificada ni que el proceso sea reabierto. Así, “una resolución adquiere tal calidad cuando el justiciable ha hecho valer todos los recursos impugnativos que la ley le otorga en defensa de sus pretensiones; o pudiendo hacerlo ante una resolución emitida por una instancia intermedia deja transcurrir el tiempo y no acciona ejercitando un derecho fundamental que la propia Constitución establece: la pluralidad de instancia. En el primer supuesto, se dice que la resolución ha quedado ejecutoriada; y en el segundo, que ha quedado consentida”¹¹⁰

Este principio tiene dos dimensiones, la cosa juzgada formal y la cosa juzgada constitucional.

¹⁰⁹ STC 4587-2004-AA, FJ. 38.

¹¹⁰ CASTAÑEDA OTSU, Susana: “Cosa Juzgada” en: AAVV: La Constitución Comentada. Tomo II. Gaceta Jurídica. Primera reimpresión, Lima 2006, pp. 568

La cosa juzgada formal es, de acuerdo a lo expresado por Blasco Soto, aquello definido a partir de “la inatacabilidad de la sentencia con referencia al mismo proceso. Así, cosa juzgada, inimpugnabilidad y firmeza son sinónimos. Se aprecia el valor formal de la cosa juzgada cuando contra una sentencia no cabe interponer recurso alguno; precluye toda posibilidad de que la misma pueda ser modificada, lo que se traduce en la imposibilidad procesal de que el resultado plasmado en la resolución del litigio sea directamente atacado. Es, por tanto, un efecto interno de la sentencia que indica la terminación del proceso. Desde este punto de vista, la sentencia constitucional sí produce efecto de cosa juzgada. Es firme desde el momento en que es dictada sin que pueda ser recurrida”¹¹¹.

Por otro lado, la cosa juzgada material se define “como el efecto propio de algunas resoluciones firmes consistente en una precisa y determinada fuerza de vincular, en otros procesos, a cualesquiera órganos jurisdiccionales (el mismo que juzgó u otros distintos) respecto del contenido de esas resoluciones (de ordinario sentencias); es, por tanto, la autoridad que produce la decisión fuera del concreto proceso en que se desarrolla. Esta función es la que en rigor es denominada por la doctrina mayoritaria ‘cosa juzgada’. Se define como la exclusión de la posibilidad de tratar en otro proceso la cuestión ya resuelta y devenida firme. La cosa juzgada material no se traduce únicamente en una mera repercusión negativa del fallo

¹¹¹ BLASCO SOTO, María del Carmen. “Reflexiones en torno a la fuerza de cosa juzgada en la sentencia dictada en cuestión de inconstitucionalidad”. En: “Revista española de derecho constitucional”. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Año 14. N. 41. Madrid, 1994. Página 41.

(es decir, no otro proceso sobre la misma materia), sino también positiva, de ahí que se hable del doble efecto o función de la cosa juzgada material”¹¹²

4.5. La Cosa Juzgada Constitucional

El Tribunal Constitucional en el EXP. N.º 5374-2005-PA/TC, caso Adela Eskenazi de Yarin, respecto al control constitucional, mediante el proceso de amparo, de las resoluciones derivadas de un proceso judicial común ha establecido lo siguiente:

“7. Este control realizado sobre la actividad del juez no implica el desconocimiento de la calidad de cosa juzgada de la que pueda gozar la resolución judicial cuestionada. En efecto, si bien es cierto que los incisos 2) y 13) del artículo 139º establecen que “(...) Ninguna autoridad (...) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (...)”, y que se encuentra prohibido “revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada”, respectivamente, también lo es que la propia Constitución ha establecido un mecanismo como el amparo (artículo 200.2º) para la protección de los derechos fundamentales, incluso cuando el presunto agente vulnerador pudiera ser una autoridad judicial.

De este modo, si tenemos en cuenta que el principio de unidad de la Constitución exige que la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en

¹¹² Ibídem. Páginas 41 y 42.

su conjunto, y que el principio de concordancia práctica exige que toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos (Expediente N.º 5854-2005-AA/TC, FJ 12), entonces podemos concluir, interpretando conjuntamente los artículos 139.2, 139.13 y 200.2 de la Constitución, que las resoluciones judiciales que constituyen cosa juzgada podrán ser «controladas» mediante el proceso constitucional de amparo, cuando hayan sido expedidas con vulneración de los derechos fundamentales.

Interpretar aisladamente los mencionados incisos 2) y 13) del artículo 139º de la Constitución en el sentido de que mediante el proceso de amparo no se pueden controlar resoluciones judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada, resulta inconstitucional. Una interpretación aislada como la expuesta conllevaría a eximir de control a determinados actos que vulneren derechos fundamentales, transgrediéndose, de este modo, el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades...”¹¹³

Así, se tiene que el Supremo Intérprete de la Constitución plantea la posibilidad de controlar mediante el amparo resoluciones judiciales, aun cuando ya hayan obtenido calidad de cosa juzgada, siempre que se vulneren derechos fundamentales.

¹¹³ EXP. N.º 5374-2005-PA/TC, caso Adela Eskenazi de Yarin

Posteriormente el Tribunal Constitucional, mediante el Exp. N° 006-2006-PC/TC plantea el concepto de cosa juzgada constitucional, señalando lo siguiente:

“68. El Tribunal Constitucional no comparte este argumento de los solicitantes. En efecto, para que una sentencia, dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, adquiera la calidad de cosa juzgada, no basta con que estén presentes sus elementos formal y material; tampoco es suficiente que exista un pronunciamiento sobre el fondo, tal como prevé el artículo 6° del Código Procesal Constitucional. Al efecto conviene recordar que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución (artículo 201°), y que, en determinados procesos constitucionales - hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento-, es instancia final de fallo (artículo 202°, inciso 2 de la Constitución) de las resoluciones del Poder Judicial; en otros –proceso de inconstitucionalidad y proceso competencial– es instancia única (artículo 202° inciso 1); de ahí que sea el supremo intérprete de la Constitución (artículo 1° de la LOTC).

69. Por eso mismo, porque su interpretación es suprema, el Código Procesal Constitucional ha reconocido la potestad jurisdiccional de este Tribunal para establecer doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar) y para fijar precedentes vinculantes con efectos normativos (artículo VII del Título Preliminar); los que, en tanto se integran en el sistema de fuentes de nuestro sistema jurídico, constituyen parámetros de validez y legitimidad constitucionales de las sentencias y resoluciones que dicten los demás órganos

jurisdiccionales. Por ello es que una sentencia dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, aun cuando se pronuncie sobre el fondo, pero desconociendo la interpretación del Tribunal Constitucional o sus precedentes vinculantes, no puede generar, constitucionalmente, cosa juzgada.

70. Ello es así porque lo que la Constitución garantiza, a través de su artículo 139º, inciso 2, es la cosa juzgada constitucional, la que se configura con aquella sentencia que se pronuncia sobre el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo con la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes vinculantes, como lo prescriben los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente. Sólo de esa manera un ordenamiento constitucional puede garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales”¹¹⁴.

Sobre el tema materia de la presente investigación han existido algunas investigaciones que permiten establecer una referencia previa respecto al tema en análisis.

¹¹⁴ Exp. N° 006-2006-PC/TC. Caso explotación de casinos de juego y máquinas tragamonedas, contra el Poder Judicial. Fj. 68. 69 y 70.

Así tenemos la tesis denominada “Cosa Juzgada constitucional vs. Cosa juzgada judicial”¹¹⁵, cuya materia de investigación viene dada por la relación existente en nuestro país, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y, dentro de ésta relación, lo concerniente a la posición del primero en referencia con la denominada “cosa juzgada constitucional” y cómo incide éste concepto en la independencia del Poder Judicial, la forma en que se regula y se aplica el instituto del precedente constitucional vinculante, y, finalmente, la supuesta posición jerárquicamente subordinada del Poder Judicial frente al Tribunal Constitucional.

El objetivo fundamental de la investigación arriba a las siguientes conclusiones:

El principio de la división de poderes, es consustancial a la democracia constitucional – en tanto es un mecanismo de control del poder de los gobernantes –, y su enunciación por los pensadores – particularmente los correspondientes a los siglos XVII y XVIII, que propusieron las bases ideológicas de la democracia – representó además la asignación histórica de funciones a los llamados tres poderes clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial, planteando la preeminencia del segundo y con ello lo que con posterioridad se denominó el Estado Legal del Derecho. Se planteó la preeminencia de la ley y, consecuentemente del legislador, dejando para el juez una simple función de “boca de la ley”, como enunciara Montesquieu.

¹¹⁵ Tesis presentada por Malpartida Castillo, Víctor, para optar el grado de Magister en Derecho con mención en política jurisdiccional – Pontificia universidad Católica del Perú – Año 2012.

El derecho se reduce a la ley, bajo el principio de legalidad y la función del juez es ser un mero aplicador mecánico de la ley.

Si bien históricamente se proyectó la existencia de tres poderes del Estado, también es cierto que nada impide la existencia de otros poderes constituidos – como el Tribunal Constitucional, de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades de la sociedad. Igualmente, se debe dejar establecido que no existe jerarquización entre los poderes existentes, debido precisamente al respeto a la esencia misma del Estado Constitucional. Cada órgano del Estado tiene delimitadas sus competencias y funciones en la Constitución, pero que, además, existe un reajuste permanente entre dichos órganos y sus funciones, de acuerdo al cambio histórico, de acuerdo a un modelo de división de poderes distinto al clásico, ajustado al modelo de pesos y balances explicado por Haberle y Landa.

Se plantea que las tres típicas funciones del Estado no sólo están al servicio de ciertas tareas fijadas en la Constitución de manera sustantiva o procesal, sino que son instrumentos del Estado constitucional sometidos al cambio histórico. Claro está que ningún órgano del Estado posee “plenos poderes en blanco”, sino que actúan en base a una fundamentación jurídica.

2.- Se debe tomar muy en cuenta la distinta concepción sobre la función que cumple el juez en un Estado Legal del Derecho y en un Estado Constitucional del Derecho. De ser un simple aplicador de la ley en el Estado Legal, pasa a cumplir la función de intérprete del texto normativo, del cual obtendrá como resultado la norma de derecho. El juez se erige en defensor de los derechos fundamentales y de las minorías, desarrollando los valores de la Constitución.

Es importante lo anterior, en tanto la justicia o jurisdicción constitucional se origina ante la necesidad de limitar el poder del Poder Legislativo, asumiendo a la Constitución como parámetro normativo. Por ello, Prieto Sanchís señala que la existencia de un Tribunal Constitucional si bien no es desde luego incompatible con el neoconstitucionalismo y el Estado Constitucional del Derecho, sí representa un residuo de otra época y de otra concepción de las cosas, en particular de aquella época y de aquella concepción (kelseniana) que hurtaba el conocimiento de la Constitución a los jueces ordinarios, justamente por considerar que aquélla no era una verdadera fuente del Derecho, sino una fuente de las fuentes. Frente a esto, el profesor español concluye que si la Constitución es una norma de la que nacen derechos y obligaciones en las más diversas esferas de relación jurídica, su conocimiento no puede quedar cercenado para la jurisdicción ordinaria, por más que la existencia de un Tribunal Constitucional imponga complejas y tensas fórmulas de armonización. Lo anterior nos hace pensar que lejos de resaltar la inconveniencia del Tribunal Constitucional – y de la justicia constitucional en general – lo cierto es que – como aprecia Prieto Sanchís – el conocimiento y la responsabilidad de la efectivización de la Constitución no pueden quedar ajenas a la justicia ordinaria, en tanto se propugna un Estado Constitucional del Derecho, siendo distinto el tiempo actual en contraste al tiempo del origen del Tribunal Constitucional.

3.- Se ha planteado que el modelo dual o paralelo de justicia constitucional es imperfecto, siendo los desajustes existentes de orden estructural, motivando los conflictos entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Se concluye que la apreciación anterior no es correcta en tanto ha sido un modelo que ha funcionado, a

pesar de sus inconvenientes y, por tanto es viable. Cabe preguntarse que si existen desajustes estructurales sobre la jurisdicción constitucional, por qué entonces, no sólo las fricciones son del Tribunal Constitucional con el Poder Judicial, sino asimismo con los otros poderes públicos. Con eso no se puede concluir que no hay que perfeccionar ciertos aspectos en cuanto a la justicia constitucional, sino que no obstante ser un modelo dual perfectible, los problemas generados no son en sentido estricto originados en el modelo. No es que entonces, sean los desajustes estructurales - lo que propone Herrera Vásquez - los que hayan propiciado las fricciones o enfrentamientos entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, sino esa actitud invasiva de competencias del primero, en base a la “autonomía procesal”, que a su vez deviene de una visión del proceso democrático peruano y de una concepción de la democracia como de contrapeso y balance – *check and balance* – que tendría como sustrato el que las competencias no estén fijados de antemano totalmente sino que es un reajuste permanente entre los poderes del Estado lo central. Como menciona Domingo García Belaunde, quizá es en éste sentido que hay que afinar algunos cambios.

4.- El Tribunal Constitucional a través de la STC 006-2006-PC/TC y al plantear el concepto de “cosa juzgada constitucional” cierra el círculo de influencia y control sobre el Poder Judicial – vale decir, lo subordina.

El concepto “cosa juzgada constitucional” elaborado por el Tribunal Constitucional, se distancia de lo que se tiene en la doctrina constitucional comparada. En ésta última se habla de “cosa juzgada constitucional” por la existencia de un fallo proveniente de la

magistratura constitucional jurisdiccional, que este sea emitido en el curso de un proceso y un procedimiento constitucional destinado a tutelar la supremacía de la Constitución y respetuoso de las exigencias de ella y que aborda temas constitucionales; mientras que el Tribunal Constitucional relaciona el concepto con el cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, la conformidad con la interpretación que haya realizado el mismo de las leyes o de toda norma con rango de ley o de los reglamentos y de sus precedentes vinculantes.

Existiendo una relación directa entre cosa juzgada e independencia judicial, y, sabiendo que con la “cosa juzgada constitucional” se puede desconocer la cosa juzgada ligada a la judicatura ordinaria, entonces consecuentemente genera una subordinación del Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional, ya que se pierde la esencia misma de la administración de justicia – la independencia -.

Otra investigación a tomarse en cuenta es la tesis denominada “El Proceso de Amparo como mecanismo de tutela de los derechos procesales”¹¹⁶, en la que se abordó la problemática sobre las numerosas demandas de amparo interpuestas contra resoluciones judiciales firmes expedidas en procesos ordinarios y constitucionales que han sido emitidas atentando contra una serie de derechos procesales reconocidas en la Constitución Política del Estado, tales como el debido proceso (artículo 139.3), motivación escrita de las resoluciones judiciales (artículo 139.5), cosa juzgada (artículo

¹¹⁶ Tesis presentada por Estela Huamán José Alberto, para optar el grado de Magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos - Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Año 2011.

139.13) y defensa (artículo 139.14), entre otros que han sido subsumidos en la categoría de tutela procesal efectiva, conforme reconoce el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

Tal investigación se planteó como objetivos establecer si las sentencias expedidas en los procesos de amparo contra resoluciones judiciales estiman las pretensiones planteadas por los recurrentes; así como establecer si las demandas de amparo contra resoluciones judiciales son interpuestas por una real vulneración de derechos procesales o por actuaciones maliciosas de los abogados litigantes que desean dilatar el trámite de los procesos judiciales.

Dicha investigación arribó a las siguientes conclusiones:

- ✓ El amparo es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos fundamentales sustantivos y procesales.
- ✓ La protección del amparo sobre los derechos fundamentales procesales ha sido el resultado de una evolución histórica que partió desde las Constituciones del siglo XIX hasta las del siglo XX, avizorando en estas últimas la incorporación de textos que reconocían la protección de los derechos procesales. Es por tal motivo que la Constitución Política de 1993 reconoce su tutela en el artículo 139, como también lo hace el Código Procesal Constitucional a través de su artículo 4.
- ✓ En lo que a experiencias comparadas respecta, debe destacarse al Código Procesal de Tucumán, el que si bien tiene un alcance local, fue el primer cuerpo normativo de esta naturaleza en el continente. A su vez, debe destacarse la legislación argentina, colombiana y mexicana, las cuales desarrollan en extenso al proceso de amparo

como mecanismo dirigido al resguardo de los derechos fundamentales de orden procesal.

✓ El contenido del artículo 4 del Código Procesal Constitucional ha sido respaldado por la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, pues de los casos conocidos por el referido colegiado, este se ha valido para precisar el contenido de los derechos fundamentales procesales, permitiendo así identificar los supuestos frente a los cuales se puede afirmar que tales derechos han sido vulnerados y, en consecuencia, recurrir al proceso de amparo.

✓ A efectos de establecer si el contenido doctrinario relativo al proceso de amparo contra resoluciones judiciales es efectivo, se realizó una investigación sobre todas las resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional durante el mes de enero de 2009 sobre demandas de amparo interpuestas contra resoluciones judiciales. El resultado de la misma fue que sólo el 10% eran estimadas, siendo que el 90% eran desestimadas generalmente porque el Tribunal Constitucional advertía que en la demanda no se apreciaba circunstancia alguna que revelara la afectación del contenido constitucionalmente protegido de los derechos procesales cuya tutela se solicitaba.

Finalmente aludiremos a la investigación “El principio ne bis in idem a la luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”¹¹⁷, en

¹¹⁷ El principio ne bis in idem a la luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Autor: Isabel Montoya

dicho trabajo se enfoca el principio del ne bis in ídem en tres partes que exponen cuestiones distintas, a saber: el derecho a que los juicios no tengan más de tres instancias; la prohibición de absolver de la instancia y el principio ne bis in ídem.

En dicha investigación se llega a las siguientes conclusiones:

A través del desarrollo de este trabajo, se determinó que de conformidad con la interpretación hecha por la SCJN, el artículo 23 constitucional contiene el principio ne bis in ídem y que éste protege en contra del doble enjuiciamiento por los mismos hechos y pone fin a los procedimientos del orden penal. Asimismo, se indicó que el principio ne bis in ídem aplica principalmente a la materia penal, pero que la Corte ha indicado que también surte sus efectos en materia administrativa. Igualmente se concluyó que dicho principio no solamente garantiza a la persona no ser juzgada dos veces por los mismos hechos, sino que también evita que se imponga una doble penalidad por la misma conducta, es decir, prohíbe la recalificación.

En el ámbito internacional, el principio ne bis in ídem es interpretado de manera muy similar por lo que se concluye que la regulación que la ley mexicana desarrolla sobre dicho principio cumple con los requerimientos internacionales. Sin embargo, también se encontraron algunas diferencias, por ejemplo: el Comité de Derechos Humanos señala que no existe violación al principio ne bis in ídem cuando la sentencia fue dictada por tribunal incompetente.

De forma contraria, la SCJN determinó que en dichos casos si hay violación ha dicho principio.

Otra conclusión importante, es la relativa a la inmutabilidad de la cosa juzgada. Comprobamos que actualmente dicha figura ya no es absoluta y tiene excepciones. Esto fue aceptado tanto por la SCJN, como por la Corte IDH y el ER. Así, tanto en la ley mexicana, como para la Corte IDH, las excepciones de la cosa juzgada se dan cuando hay elementos de fraude en el juicio. En la CPI, las excepciones a dicha figura procesal se encuentran relacionadas con el principio de complementariedad que rige a dicho tribunal internacional, ya que ésta podrá conocer de un caso que ya haya sido juzgado, cuando se verifique que el enjuiciamiento previo fue realizado con la intención de sustraer a la persona de la acción de la justicia. Esta misma razón es la que permitiría que un tribunal mexicano volviera a juzgar a un individuo cuando esté ante un caso que ya fue juzgado por un tribunal extranjero. Esto, sin que se pueda alegar una violación al principio ne bis in idem. El fraude en el juicio anterior, sea en el ámbito nacional o en el internacional, constituye la mayor excepción a la cosa juzgada.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS

Y CONTRASTACIÓN

DE

RESULTADOS

5.1. Presentación de Casos

Definido el problema a investigar, formulados los objetivos y propuesta la hipótesis se hace necesario determinar los elementos que se va a llevar a cabo el estudio o investigación, en este caso se analizarán las sentencias del Tribunal Constitucional en donde se halla aplicado la cosa juzgada constitucional y con ello se haya afectado la inmutabilidad de una sentencia del Poder Judicial con calidad de Cosa Juzgada.

Por otro lado, queremos precisar que, si bien en el proyecto se consignó que serían cinco casos correspondientes a acciones de amparo y cinco casos relativos a procesos de Hábeas Corpus, en el decurso de elaboración del informe final se han podido identificar seis sentencias resueltas por el máximo intérprete de la constitución peruana, en donde se invoca la figura de la cosa juzgada constitucional, siendo cinco sentencias recaídas en un proceso de amparo y una recaída en un proceso de hábeas corpus

A continuación, presentamos las unidades de análisis utilizadas en el presente trabajo de investigación:

1. EXP. N.º 04617-2012-PA/TC LIMA PANAMERICANA TELEVISIÓN S.A.

Hechos

Con fecha 25 de mayo de 2011, la actora interpone demanda de amparo contra Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), solicitando que declare inexigible la deuda tributaria acumulada durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2003 y el 8 de junio de

2009. Mega que solicita ello en defensa de sus derechos a la libertades informativas, en cuanto derecho a fundar medios de comunicación, "a participar en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación, en la manifestación que sustenta la titularidad de derechos fundamentales para las personas jurídicas", "a la propiedad y a la herencia en la posición iusfundamental de inmunidad frente a las intervenciones injustificadas de los poderes públicos y de terceros", y a "la libertad de empresa en la manifestación de libertad de organización". El Tercer Juzgado Constitucional de Lima declara improcedente la demanda estimando que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. La Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada estimando que de lo expuesto en el expediente no se aprecia la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales que comprometa seriamente su contenido constitucional protegido.

Fundamentos del TC

Siguiendo lo expresado por la Corte IDH, en el presente caso, se advierte que la demandante (Panamericana Televisión S.A.) tiene una deuda de carácter tributario exorbitante. Al respecto, no puede soslayarse que si la deuda se ha incrementado exponencialmente ello obedece a que, dolosamente, la gestión anterior dejó de honrarlas. No debemos olvidar que la gestión anterior estaba en manos de Genaro Delgado Parker que fue el administrador judicial designado por el Estado peruano, a través de su Poder Judicial, es decir, Genaro Delgado Parker fue designado por un juez de la república, a quien representaba, para administrar diligentemente Panamericana Televisión S.A., lo que no ha ocurrido. Entonces, el propio Estado también es responsable de dicho incremento,

no sólo porque la administración del canal le fue despojada mediante irritas resoluciones judiciales sino porque ha sido la propia desidia de la Administración Tributaria la que ha permitido que la deuda se haya incrementado; pues, pese a tener las herramientas necesarias para cobrar tales tributos, no las utilizó en su momento.

Si la actora se ha visto inmersa en tal nivel de endeudamiento con el fisco, es precisamente por la actuación del propio Estado. De ahí que, pretender cobrar la totalidad de la deuda a la actual gestión sin considerar tal situación resulta arbitrario.

Efectivamente, los pronunciamientos judiciales que despojaron a la actual administración del control del mencionado canal de televisión resultan bastante discutibles.

No sólo por haberse recurrido a jueces incompetentes en razón del territorio sino porque, en buena cuenta, pretendieron arrebatárselo a sus legítimos propietarios a través de espurias medidas cautelares y posteriores intentos de modificar la participación accionaria.

La opinión pública ha sido testigo de los bochornosos actos que acontecieron en la toma de posesión del canal televisivo por parte de la gestión los tributos, sin mayor remilgo, evadió los tributos.

Por ello, sorprende la pasividad de la SUNAT en fiscalizar y ejecutar dicha deuda a Panamericana Televisión cuando estuvo administrada por Genaro Delgado Parker. Por más discrecionales que sean sus facultades, éstas no pueden amparar el tratamiento exageradamente permisivo con

que ha sido tratada la empresa mientras estuvo gestionada por la administración anterior.

Aunque los tributos no pueden ser entendidos como sanciones, en las actuales circunstancias, imputar íntegramente la deuda tributaria dejada de pagar al grupo económico perjudicado con dicha suerte de expropiación judicial es, en buena cuenta, una medida carente de racionalidad y, en la práctica, una sanción anómala que termina por vulnerar el derecho de propiedad de la recurrente y que este colegiado se encuentra en la obligación de proteger.

En consecuencia, habiendo la Corte IDH ejercido, en un caso similar al de autos (caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, Resolución del 24 de noviembre de 2009 [Supervisión de cumplimiento de sentencias]), un control de convencionalidad vertical; este colegiado, siguiendo los lineamientos establecidos por la referida corte, es que debe estimar la presente demanda de amparo. Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.

Decisión

El TC RESOLVIÓ Declarar FUNDADA la demanda y, en consecuencia, declarar INEXIGIBLE a la actora la deuda tributaria generada entre el 24 de febrero de 2003 y el 8 de junio de 2009.

2. EXP. N. 02135-2012-PA/TC LIMA LUIS ALBERTO CARDOZA JIMÉNEZ

Hechos

Con fecha 7 de octubre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. solicitando que se deje sin efecto el despido incausado del que fue objeto; y que, en consecuencia, lo repongan en el cargo de chofer operador de cisternas de GLP a granel. Refiere que si bien celebró sucesivos contratos con empresas tercerizadoras de servicios, en los hechos realizó labores de naturaleza permanente y bajo entera subordinación del personal de la empresa demandada, con la cual mantuvo una relación laboral directa por más de 10 años; no obstante ello, con fecha 24 de setiembre de 2009, se le impidió el ingreso a su centro de trabajo manifestándosele que no trabajaba para ella. Agrega que, conforme a lo señalado por la Autoridad de Trabajo, se produjo la desnaturalización de la tercerización y se ordenó la inclusión de todos los trabajadores a la planilla de la sociedad emplazada, pero ello no se ha cumplido, vulnerándose su derecho al trabajo por ser despedido de modo incausado.

La apoderada de la empresa Repsol YPF Comercial del Perú S.A, con fecha 9 de noviembre de 2009, deduce las excepciones de litispendencia y de falta de legitimidad para obrar del demandado, formula denuncia civil a efectos de que Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Vulcano Ltda., Cooperativa de Trabajo Calidad y Excelencia Ltda., Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Santo Domingo, Addeco Perú S.A. y Servosa Cargo S.A.c. sean incorporadas al proceso de amparo. Asimismo, contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, por cuanto el demandante mantenía vínculo laboral con diferentes empresas, siendo su último empleador la empresa Servosa Gas S.A.C., que le brinda servicios tercerizados a través de la celebración del contrato de transporte y distribución de gas licuado de petróleo a granel; por lo que

el personal dispuesto por Servosa para la ejecución de dicho servicio, entre los que se encuentra incluido el demandante, no tiene vínculo con su representada. Refiere que ello se encuentra acreditado con las boletas de pagos suscritas por el demandante en señal de recepción y conformidad, así como con las constancias de las transferencias y abonos bancarios de remuneraciones efectuadas por su empleadora, la empresa Servosa. Sostiene que el Acta de Infracción 468-2008-MTPE/2/12.720, de fecha 19 de mayo de 2008, instrumental con la cual el demandante pretende acreditar la supuesta desnaturalización del contrato de tercerización que mantiene con Servosa, está sujeta a un procedimiento administrativo que se encuentra en trámite y que, hasta la fecha, no cuenta con resolución administrativa firme. Agrega que en el presente caso no se está frente a un despido incausado, fraudulento o nulo, sino frente a un despido por la comisión de falta grave efectuado por la empresa Servosa en contra del actor. El Jefe de Recursos Humanos de la empresa Servosa Gas S.A.C., con fecha 12 de noviembre de 2009, se apersona a la instancia y solicita su intervención litisconsorcial. El Cuarto Juzgado Civil del Callao, con de fecha 12 de noviembre de 2009, declaró improcedente la solicitud de denuncia civil; con fecha 13 de noviembre de 2009, declaró improcedente el pedido de intervención litisconsorcial facultativa; con fecha 27 de abril de 2010, declaró infundadas las excepciones propuestas; y con fecha 5 de agosto de 2010, declaró fundada la demanda, por estimar que a través del Acta de Infracción extendida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se ha probado la desnaturalización del contrato de tercerización de prestación de servicios celebrado por la demandada, por lo que entre el actor y la demandada existe una relación laboral sujeta a plazo indeterminado, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 728, lo que supone que el empleador solo podía poner fin a dicha relación

invocando una causa justa prevista por la ley, lo cual no ha ocurrido. Consecuentemente, considera que se ha configurado un despido incausado que afecta el contenido esencial del derecho al trabajo. La Sala Superior competente declaró nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, por considerar que existía incompetencia por razón de territorio de conformidad a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 51 del Código Procesal Constitucional. En su recurso de agravio constitucional el demandante cuestiona la sentencia de vista precisando que la dirección que figura en su documento nacional de identidad no justifica la decisión impugnada, pues la designación del domicilio efectuada en el escrito de demanda, esto es, haber recurrido ante el Juez del Callao, se justifica en aplicación del artículo 34 del Código Civil. Asimismo, afirma que si la excepción de incompetencia no ha sido deducida por la demandada, no puede ser declarada de oficio. Este Tribunal, mediante sentencia de fecha 21 de agosto de 2013, declaró fundada la demanda de amparo del actor, decisión que fue declarada nula a través de la resolución de fecha 6 de enero de 2014, luego de que declarara fundado el pedido de nulidad presentado por la parte demandada, al observar la existencia de una contradicción frente a lo resuelto previamente en la STC 02698-2012-PA/TC donde se había declarado la invalidez del Acta de Infracción de fecha 19 de mayo de 2004, medio probatorio que había sido empleado para respaldar la solución de este caso.

Argumentos del TC

Por lo que, debe entenderse a la tercerización como una forma de organización empresarial por la que una empresa denominada principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad

principal a una o más empresas denominadas tercerizadoras, para que estas lleven a cabo un servicio u obras vinculadas o integradas a aquella.

16. Por ende, la tercerización consiste en la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades; y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Sin embargo, a fojas 23 de autos, obran originales del carnet de capacitación expedidos por Repsol YPF Comercial del Perú S.A. a favor del demandante correspondientes a los años 2007 y 2008. Además de ello, tampoco se ha observado la cláusula 5.13 del contrato de transporte y distribución de gas licuado de petróleo a granel, celebrado el 16 de julio de 2007 entre Repsol YPF Comercial del Perú S.A. y Servosa (367 a 418), en el que se precisó que "EL TRANSPORTISTA deberá asegurarse que su personal reciba las capacitaciones de seguridad correspondientes requeridas para esta operación, y que se le otorgue el correspondiente carné de capacitación". Esto es, Servosa Gas S.A.C., como empresa tercerizadora, debía brindar la capacitación a sus trabajadores destacados a la empresa Repsol YPF Comercial del Perú S.A. lo que no ha ocurrido en autos. Es decir que Repsol YPF Comercial del Perú S.A. se ha comportado como empleador del demandante transgrediendo la norma citada.

17. Asimismo, en el caso en concreto, estando a los formatos de control en garitas tolerancia cero, se consigna al demandante como chofer del vehículo de placa N° XO-6027 (fs. 79 a 82), vehículo que pertenecía a la empresa demandada, conforme obra de la tarjeta de propiedad (fs. 108 Y 115) Y del anexo 1 del contrato de transporte y distribución de gas licuado de petróleo a granel celebrado el 16 de julio de 2007 entre Repsol YPF Comercial del Perú S.A. y Servosa. Si bien posteriormente obra un endoso de renovación de

seguros la positiva (fojas 421), teniendo como asegurado a la empresa Servosa Gas S.A.C., se advierte que este es de fecha 15 de julio de 2008; es decir, de fecha posterior al inicio de la relación entre Servosa Gas S.A.C. y la demandada (16 de julio de 2007), no obrando en el presente proceso documento alguno que acredite la propiedad de Servosa Gas S.A.C. con anterioridad. 18. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido en la STC 02111-2010- P AITC lo siguiente: En tal sentido, a juicio de este Tribunal, cuando el artículo 4-B del Decreto Supremo N.º 003-2002-TR, dispone que la desnaturalización de un contrato de tercerización origina que los trabajadores desplazados tengan una relación de trabajo directa con la empresa principal, es porque valora implícitamente que en tales supuestos el objetivo o "justificación subyacente" a la tercerización (consistente en la generación de una mayor competitividad en el mercado a través de la descentralización productiva) no ha sido el (único) móvil de la tercerización efectuada, al haber tenido como propósito subalterno el disminuir o anular los derechos laborales de los trabajadores. En dicho contexto, cuando una empresa (principal) subcontrata a otra (tercerizadora), pero sigue manteniendo aquélla el poder de dirección sobre los trabajadores, y la función o actividad tercerizada se sigue realizando en los ambientes de la empresa principal y con los bienes y recursos de ésta, y a su cuenta y riesgo, resulta evidente que dicha subcontratación resulta incompatible con nuestra Constitución. Por tanto, dado que se ha acreditado en autos que el demandante se encontraba bajo la subordinación de la empresa principal, al no ceñirse la tercerización laboral a lo prescrito en el artículo 4-B del Decreto Supremo 003-2002-TR; se debe concluir que la relación del recurrente con la empresa usuaria era una relación laboral directa a plazo indeterminado, y cualquier decisión de su verdadero empleador, -es decir, de la empresa usuaria-, de darla por concluida, solo podía sustentarse en una causa

justa establecida por la ley y debidamente comprobada; de lo contrario se configuraría un despido arbitrario, como ha sucedido en el caso de autos (f. 3). Si bien en el proceso de amparo seguido entre Repsol YPF Comercial del Perú S.A. y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, expediente 02698- 2012-PA/TC, se declaró la nulidad del Acta de Infracción de fecha 19 de mayo de 2008; de la Resolución Divisional 217-2009-MTPE/21I2.720, del 11 de noviembre de 2009; y de la Resolución Directoral N.º 085-2009-MTPE/21I2.7, del 11 de diciembre de 2009, debe considerarse que los efectos de dicha decisión no pueden ser extensivas de manera directa al presente caso, por cuanto el demandante no fue citado en el referido proceso para poder, con posterioridad, extenderle los efectos de dicha decisión; en todo caso, al pretender extender al actor los efectos de un proceso en el cual no ha participado, se estaría incurriendo en la vulneración del debido proceso. Por lo expuesto, consideramos que en el presente caso se ha configurado un despido arbitrario, vulneratorio del derecho al trabajo del actor, reconocido en el artículo 22 de la Constitución; por lo que la demanda debería estimarse. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la sociedad emplazada ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo, correspondería ordenar la reposición del demandante como trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. 23. Asimismo, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, la entidad emplazada debería asumir los costos y costas procesales, a ser liquidados en la etapa de ejecución.

Decisión

El TC resolvió declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el despido del que ha sido objeto el demandante. 2. ORDENAR que Repsol YPF Comercial del Perú S.A. reponga a don Luis Alberto Cardoza Jiménez como trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos y costas del proceso en la etapa de ejecución.

3. EXP. N. 0 03700-2013-PA/TC LAMBAYEQUE AUGUSTO SIPIÓN BARRIOS

Hechos

Con fecha 22 de setiembre de 2009, don Augusto Sipión Barrios debidamente representado por don Pedro Vicente Torres Fernández interpone demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La presente demanda tiene por objeto que se declaren inaplicable las Resoluciones de Determinación N. 0 5 072-003-0001407 a 072-003-0001434 y las Resoluciones de Multa N. 0 5 072-003-0001577 a 072-002-0001596 y 072-002-0001599 a 072-002-0001608, y que se dejen sin efecto las cobranzas coactivas seguidas para dejar sin efecto tales valores así como cualquier medida cautelar que se hubiera trabado contra dichas deudas.

El MEF a través de su procurador público deduce la excepción de oscuridad en el modo de proponer la demanda y de falta de agotamiento de la vía previa. Asimismo, aduce que tal controversia debe ser dilucidada en el proceso contencioso administrativo y no en el proceso de amparo. En cuanto al fondo de lo solicitado sostiene que la adopción de medidas cautelares previas se encuentra justificada en virtud de lo establecido en el literal "b" del artículo 56° del Código Tributario.

Por su parte, el procurador público de la Sunat deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa e incompetencia. El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y, en consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. El ad quem confirma la recurrida por el mismo fundamento.

Fundamentos del TC

En primer lugar, cabe mencionar que no corresponde emitir pronunciamiento de fondo sobre el extremo de la demanda en el que se peticiona dejar sin efecto la deuda tributaria que la Sunat ha determinado por ser "exorbitante" (Cfr. Fundamento 35 de la Demanda) debido a que la jurisdicción constitucional no puede subrogar a la Administración Tributaria en el cálculo de la deuda, en caso de que ésta exista. La labor de la justicia constitucional, en materia de salvaguarda de derechos fundamentales se ciñe exclusivamente a restituir el ejercicio o a ordenar el cese de amenazas al ejercicio de los mismos.

Ante una eventual conculcación de los derechos constitucionales del contribuyente en la que no se ha cuestionado la constitucionalidad del

tributo en sí, los jueces constitucionales no se encuentran habilitados a pronunciarse sobre la existencia de una deuda como pareciera desprenderse del tenor de la demanda y mucho menos respecto del cálculo de la misma.

De advertirse alguna conculcación al derecho al debido procedimiento administrativo o a cualquiera de sus manifestaciones durante el procedimiento de fiscalización, se debe enmendar tal arbitrariedad ordenando la nulidad de las actuaciones que repercutan negativamente en el derecho fundamental del contribuyente y de todo lo actuado con posterioridad a la misma a fin de que la Administración Tributaria enmiende su proceder. Aunque los argumentos de la actora han sido presentados de forma desgredada, la fiscalización realizada no puede ser adjetivada como inmaculada debido a la serie de irregularidades que, como han sido expuestas en la RTF N. 0 01000-4-2009 de fecha 4 de febrero de 2009 (Cfr. fojas 154-155), ameritaron que la Resolución de Intendencia N. 0 075014000413/SUNAT sea declarada nula.

La dilucidación respecto de si la Sunat adecuó su proceder a lo establecido en la mencionada resolución es una cuestión que indudablemente tiene relevancia constitucional puesto que si no participó en la fiscalización, ni pudo conocer los resultados de la misma, ni impugnar los valores emitidos luego de la inspección que se le realizó, ello incide en el contenido constitucionalmente tutelado del derecho debido procedimiento en su manifestación del derecho de defensa.

Tal como se aprecia de autos, existe un peritaje realizado por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú a solicitud del propio Tribunal Fiscal en el que se concluye que tanto los descargos presentados

durante la fiscalización como el recurso de reclamación presentado no han sido firmados por el mandante. Ante tal situación, en lugar de decretar directamente la nulidad de las actuaciones de la Administración Tributaria que menoscabaron el derecho de defensa del actor, el Tribunal Fiscal resolvió dar trámite de reclamación a la acción planteada y la Sunat a través de Resolución de Intendencia N. 0 0750140000 4/SUNAT declaró fundada en parte el mencionado recurso.

No obstante, lo expuesto, dicho vicio es de tal magnitud que, a juicio de este Colegiado, acarrea la nulidad de todo el procedimiento de fiscalización. Si se ha determinado que el demandante no participó en el mismo, lo que corresponde es permitírsele participar en dicho procedimiento a fin de que pueda salvaguardar sus intereses. La Administración Tributaria cuando ejerza facultades discrecionales en las que tenga un amplísimo margen de acción se encuentra ineludiblemente obligada a respetar los derechos del contribuyente y a no caer en arbitrariedades, justificando en todo momento su proceder.

Al dejarse sin efecto el mencionado procedimiento de fiscalización, también corresponde dejar sin efecto los valores emitidos sobre la base de los resultados del mismo así como los apremios que se hubieren decretado. En tales circunstancias, deberá dejarse sin efecto todo el procedimiento de cobranza coactiva y todo lo actuado con posterioridad al mismo, restituyendo o indemnizando los bienes que se hubieren ejecutado.

Decisión

El TC resolvió declarar FUNDADA la demanda de autos, en lo que respecta a la afectación del principio de proscripción de la arbitrariedad,

en consecuencia, reiniciar el procedimiento de fiscalización conforme a lo señalado en los Fundamentos N. 05 9 y 10.

4.EXP. N.º 04298-2012-PA/TC- LAMBAYEQUE CASO ROBERTO TORRES GONZALES

Hechos

Con fecha 24 de mayo de 2012, doña Leny Patricia Vásquez Castro interpone demanda de amparo a favor de don Roberto Torres Gonzales, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y la dirige contra los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, señores Balcázar Zelada, García Ruiz, Zapata Cruz; y contra el Procurador Público del Poder Judicial. Solicita dejar sin efecto la Sentencia N° 33-2012, de fecha 22 de mayo de 2012, que lo condena por el delito de peculado de uso a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, emitida en el Exp. N° 1488-2011-96-1706-JR-PE-06. Alega la vulneración de los derechos de defensa, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una resolución fundada en derecho, y de los principios del juez natural y de legalidad procesal penal del favorecido.

Refiere que en base a noticias periodísticas de fechas 26 y 27 de enero de 2011, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo inició una investigación por la presunta comisión del delito de peculado de uso y en su oportunidad formuló acusación contra el favorecido. Señala que el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo en el Exp N° 1488-2011 emitió sentencia absolutoria; que, sin embargo, ante el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Anticorrupción de

Lambayeque y el Ministerio Público, el proceso fue elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones, la cual emitió la sentencia condenatoria objeto del proceso de amparo. Alega que la Sentencia N° 33-2012, de fecha 22 de mayo de 2012, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ha afectado el debido proceso pues no ha aplicado, de modo injustificado, la excepción típica prevista en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal, que define el delito de peculado de uso, apreciándose una motivación aparente. También alega afectación del derecho al juez natural, pues la sentencia condenatoria fue suscrita por un juez que se encontraba de licencia.

Los jueces emplazados, José María Balcázar Zelada y Margarita Isabel Zapata Cruz, integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, contestan la demanda afirmando que la misma debería declararse improcedente, pues el recurrente dejó consentir la resolución que dice afectarlo al no haber interpuesto el recurso de casación ante la Corte Suprema, además de consistir la interpretación de la excepción prevista en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal, un asunto de legalidad ordinaria que corresponde resolver al juez penal. Por otro lado, alegan que de acuerdo al artículo 359.2 del nuevo Código Procesal, los jueces pueden intervenir en la deliberación y votación de una causa penal, aún cuando se encuentren de licencia. Por último, afirman que las fotos presentadas no demuestran ninguna falta de imparcialidad, y que corresponden a una reunión llevada a cabo con posterioridad a la emisión de la sentencia.

El Procurador Público Adjunto del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada improcedente en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, en tanto la interpretación

del derecho ordinario es un asunto de competencia de la jurisdicción ordinaria.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo declara fundada la demanda por considerar que de la lectura de la sentencia condenatoria se advierte que no se explica y justifica el bien jurídico protegido por el tipo penal de peculado de uso, no se precisa el perjuicio económico que se ha causado, se ha obviado la ejecutoria suprema dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el Exp. N° 05-2008, caso Luis Alberto Mena Núñez, la cual expresa un criterio opuesto al adoptado por los jueces demandados, ni se ha explicado por qué debe realizarse una interpretación restrictiva y no extensiva de la excepción contenida en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal; por lo que la sentencia carece de una debida motivación interna. Además, considera que se ha violado el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, pues el juez superior Balcázar Zelada interrumpió intempestivamente su licencia para participar de la audiencia y el juzgamiento del recurrente, además de haber aparecido en unas fotografías difundidas por la prensa local reunido con una persona allegada a la primera regidora de la Municipalidad de Chiclayo.

La Sala Especializada de Derecho Constitucional revoca la apelada y la declara improcedente por considerar que al no haber impugnado (recurso de casación) la sentencia de fecha 22 de mayo de 2012, el favorecido dejó consentir dicha resolución.

Fundamentos de TC

En este caso, luego de analizada la controversia, el Tribunal Constitucional señala:

17. Este Tribunal aprecia que si bien la Sala emplazada ha llevado a cabo una interpretación correcta del sentido de la disposición normativa contenida en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal, en tanto el “uso personal del vehículo”, excluido de tipificación penal, no puede incluir un uso ajeno al funcionario, léase uso “familiar” o “amical” del mismo, dado que la razón de la exención normativa es la facilitación del desenvolvimiento y seguridad del alto funcionario (por lo que se permite un uso más allá de las funciones oficiales), también es cierto que una interpretación excesivamente rígida de esta exclusión puede llevar a desnaturalizar el sentido mismo de la excepción típica. En efecto, si bien el vehículo oficial del alto funcionario no puede ser destinado al “uso personal” del cónyuge, hijos u otros familiares del funcionario o como vehículo que sirva de movilidad permanente a otra persona distinta del funcionario (conducta que debe ser calificada como peculado de uso), tampoco puede considerarse que cualquier uso que se haga del vehículo por una persona distinta del funcionario constituye una conducta típica. Y es que muchas veces el vehículo oficial del alto funcionario, de modo inevitable, es utilizado por otras personas sin que ello distorsione necesariamente el “uso personal” que el funcionario hace de él. Si tenemos en cuenta el círculo de familiares o personal de confianza que desarrollan múltiples actividades conjuntamente con el alto funcionario o por encargo de él, resulta desproporcionado entender que en cada uno de estos casos, característicamente circunstanciales, se tipifica el delito de peculado de uso, máxime si las actividades desarrolladas con los integrantes de la familia nuclear, principalmente, pueden considerarse como parte de las actividades personales del funcionario, de un modo prácticamente indesligable.

Así, una línea de aplicación rígida de la interpretación restrictiva efectuada por la Sala emplazada, en el sentido de que la exención típica “servicio

personal por razón del cargo”, se llena de contenido, en exclusividad, con los usos estrictamente individualizados del funcionario, de modo que sólo éste puede usar dicho vehículo, supondría restringir en extremo el sentido de la exención, y convertiría la prerrogativa en una camisa de fuerza que la haría casi impracticable, pues el funcionario estaría siempre cuidándose de que nadie distinto de él se encuentre en el vehículo, ante la amenaza de que un comportamiento distinto configuraría tipicidad por peculado de uso. Una exigencia de razonabilidad en la aplicación de la exención estipulada en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal se impone, por tanto, de modo que no mantenga a dichos funcionarios en un régimen de persecución desproporcionada, ni les abra posibilidades de abuso del referido bien público.

18. En dicho contexto, este Tribunal considera que si bien la interpretación restrictiva que efectuó la Sala emplazada fue correcta en cuanto al sentido de la excepción típica prevista en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal, dado que consideró que “el uso personal del vehículo” excluye “el uso familiar” del mismo, existe una motivación insuficiente en cuanto a los términos en los cuales cabe entender que un “uso familiar” del vehículo resulta excesivo y totalmente ajeno a las razones de funcionalidad de la excepción penal en cuestión, dado que, como ya se dijo existe la posibilidad de que en algunos casos dicho “uso familiar” no constituya una acción típica. No ha efectuado, pues, la Sala emplazada un examen de razonabilidad de los términos en los cuales cabe excluir ciertas acciones de la esfera de aplicación de la excepción prevista en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal o de los términos en los cuales cabe incluir dichas acciones. En el caso específico del Alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, don Roberto Torres Gonzales, la Sala no ha precisado por qué es que el hecho de trasladar a sus hijos al Jockey Club

de Chiclayo en el vehículo oficial, un día en que el Alcalde había viajado a la ciudad de Lima, constituye un “uso familiar” del vehículo, ajeno a todo margen de razonabilidad, que se encuadre más bien como un uso exclusivo y sistemático del vehículo oficial por personas distintas del funcionario. En consecuencia, este Tribunal estima que la sentencia N° 33-2012, de fecha 22 de mayo de 2012, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ha afectado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

19. Por último, en cuanto al alegato de que la Sala Penal emplazada no ha tomado en cuenta la ejecutoria suprema dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el Exp. N° 05-2008, caso Luis Alberto Mena Núñez, la cual expresa un criterio opuesto al adoptado por los jueces demandados, este Tribunal estima que si bien dicha ejecutoria podía ser ilustrativa en cuanto a la definición de la excepción típica, la misma no es vinculante, pues representa un único criterio que no ha sido confirmado por otras ejecutorias o fijado como doctrina jurisprudencial en un Pleno Casatorio de la Corte Suprema.

Decisión

El TC resolvió declarar INFUNDADA la demanda en el extremo relacionado con la vulneración de los derechos al juez predeterminado por ley y al juez imparcial.

Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; en consecuencia, NULA la Sentencia N° 33-2012, de fecha 22 de mayo de 2012, Expediente N° 1488-20111-96-1706-JR-PE-06, expedida por la

Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que condenó a Roberto Torres Gonzales por delito de Peculado de Uso a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. DISPONER que la Sala emplazada emita nueva resolución, teniendo en cuenta lo expresado en los fundamentos 17 y 18 de la presente sentencia.

5. EXP. N.º 02880-2013-PHC/TC CAÑETE GERARDO LEONIDAS CASTRO ROJAS

Hechos

Con fecha 21 de diciembre de 2012 doña Rosa Guadalupe Calle Parra interpone demanda de hábeas corpus a favor de su esposo, don Gerardo Leonidas Castro Rojas contra el Juez del Tercer Juzgado Unipersonal Especializado de Lima, señor Leon Velasco, el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos de Lima, señor Morales Cordova, y los vocales integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores Salinas Siccha, Castañeda Otsu y Mayta Menacho, así como contra la Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos de Lima y contra los fiscales Linares Zamora, Pérez Gómez y Meza Salas, con el objeto de que declare la nulidad de la resolución de fecha 21 de diciembre de 2011 y su confirmatoria de fecha 12 de abril de 2012, debiéndose retrotraer el proceso a la etapa de formalización de la investigación, y en consecuencia disponer la inmediata libertad del favorecido, puesto que considera que se le está afectando los derechos

al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia del beneficiario. Refiere que en el proceso penal que se le siguió por el delito contra la administración pública, en la modalidad del delito de corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico, fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad. Señala que por presión pública se dio un sentido distinto a las declaraciones de los efectivos policiales, cuando específicamente habían declarado que no habían presenciado la entrega del dinero. Realizada la investigación sumaria se observa que la Fiscal emplazada expresa que ha actuado conforme lo establecido en el nuevo código procesal penal aplicando el criterio interpretativo ahí expuesto. Por su parte los vocales emplazados coinciden al expresar que el actor fue condenado en un proceso regular sobre hechos que fueron materia de dilucidación en la secuela del proceso.

El Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria de Cañete declara improcedente la demanda considerando que el proceso de hábeas corpus no puede ser utilizado como una instancia de revisión de lo actuado en la justicia ordinaria a efectos de realizar la valoración probatoria ni tampoco puede pronunciarse sobre la responsabilidad o culpabilidad del actor. La Quinta Sala Especializada en lo Penal para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada por similares argumentos. El recurso de agravio constitucional reproduce los mismos argumentos esbozados en su demanda.

El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 21 de diciembre de 2011 y su confirmatoria de fecha 12 de abril de 2012, debiéndose en consecuencia disponer la nulidad del

proceso penal y disponerse su inmediata libertad, puesto que considera que se le está afectando los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia del beneficiario.

Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138° de la Constitución Política del Perú) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues sólo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva. En consecuencia, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone en , absoluto una determinada extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que supone que se exprese no solo la norma aplicable al caso, sino que también se explique y justifique por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado

en los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta o se establezca el supuesto de motivación por remisión [Cfr. Expediente N.O 4348- 2005-PA/TC]. En el caso presente se advierte que la resolución de fecha 21 de diciembre de 2011 y su confirmatoria de fecha 12 de abril de 2012, no se encuentra debidamente motivada puesto que expresa que: "En lo que respecta a la acusación formulada contra Gerardo Leonidas Castro Rojas, de haber ofrecido dinero al funcionario Ríos Delgado, únicamente se tiene la versión de esta persona en el sentido, que en la oportunidad que Romualda Pérez le ofreció dinero se encontraba presente Castro Rojas, quien asintió con la cabeza, no existiendo otro medio probatorio que le de respaldo a ello, por el contrario, tenemos que el propio testigo Ríos Delgado expresó en la audiencia de juicio que el acusado Castro Rojas no le ofreció en ninguna oportunidad dinero alguno.

Pero por otro lado, si se encuentra plenamente acreditado que Castro entregó dinero a esa misma persona, conforme a la versión expuesta no solo por el citado Ríos Delgado, sino también con los propios dichos de los acusados (..) igualmente Castro Rojas ratificó tal hecho expresando además que dicho dinero se lo entregó a su co-acusada Pérez Guedes, quien lo uso en su cartera (..)" (resaltado agregado) En tal sentido se advierte, primero, una contradicción entre los fundamentos esbozados en la sentencia condenatoria, ya que inicialmente se expresa que sólo se tiene contra el demandante la versión del funcionario Ríos Delgado, quien expresamente afirmó que el señor Castro Rojas no le ofreció dinero en ninguna oportunidad, lo que implica que ni siquiera dicha versión constituye una prueba fehaciente en su contra, y posteriormente se señala

que existe más de una declaración, señalando no solo a Ríos Delgado sino también a los acusados; y, según o, falta de sustento para la determinación de una decisión que en definitiva limita la libertad personal del demandante, ya que los jueces demandados basan su decisión en la versión de Ríos Delgado -quien expresamente señala que el demandante no le ofreció en ninguna oportunidad dinero alguno- y los acusados, sin existir pruebas fehacientes que vinculen directamente al actor con la comisión de los hechos por los cuales ha sido condenado. Por ende considero que la motivación esbozada en la sentencia condenatoria es insuficiente en términos constitucionales, ya que no existe un sustento adecuado que legitime la determinación de la sanción aplicada al actor.

Asimismo la resolución confirmatoria incurre en la misma deficiencia de motivación por lo que también ha sido emitida de manera arbitraria. Y decimos esto porque la resolución confirmatoria expresa los mismos argumentos para confirmar la condena al demandante Castro Rojas sustentando la decisión de confirmar la sentencia condenatoria en el hecho de que " (..) la conducta desarrollada por el sentenciado Castro Rojas se subsume en el supuesto de dar. Independientemente que él no haya ofrecido expresamente ésta acreditado incluso por su propio dicho que luego de conseguir el dinero concurrió junto a (Perez Guedes a reunirse con el denunciante Rios Delgado para dar o entregar el soborno (..)". En tal sentido tenemos que el propio sustento de la sala que confirma la sentencia condenatoria está basado en cuestiones minimas que no logran ser un sustento valido para confirmar la restricción de la libertad, razón por la que este Colegiado considera que las decisiones judiciales que condenan al demandante deben ser declaradas nulas a efectos de que puedan motivar debidamente la condena del demandante, no basándose solo en versiones que no tienen mayor respaldo probatorio.

Por lo expuesto la demanda debe ser estimada debiéndose declarar la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 21 de diciembre de 2011 y su confirmatoria de fecha abril de 2012. En consecuencia debe declararse nulidad de la sentencia condenatoria y la de su confirmatoria, respecto de la motivación refenda al delito de corrupción de funcionarios, -debiendo los emplazados emitir nueva decisión basada en medios probatorios objetivos que realmente comprueben la responsabilidad del actor, cumpliendo las exigencias de debida motivación.

Efectos de la sentencia Corresponde que los emplazados vuelvan a emitir nueva resolución debidamente motivada respecto del delito de corrupción de funcionarios basándose conjuntamente en los medios probatorios que obran en autos.

Decisión

El TC resolvió Declarar IMPROCEDENTE la demanda conforme se expresa en el fundamento 2 de la presente sentencia. 2. Declarar FUNDADA la demanda respecto a la afectación de los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales, debiéndose declarar la NULIDAD de la sentencia condenatoria de fecha 21 de diciembre de 2011 y su confirmatoria de fecha 12 de abril de 2012, debiendo por ende los emplazados emitir nueva decisión debidamente motivada, conforme lo expresado en el punto 4 de la presente sentencia.

6. STC N° 3238 2013-PA/TC LIMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Hechos

Con fecha 29 de abril de 2010, la recurrente interpone demanda de amparo contra el juez a cargo del Vigésimo Segundo Juzgado Laboral de Lima y la Primera Sala Laboral de Lima, solicitando que se repongan las cosas al momento anterior a la vulneración del derecho constitucional invocado. Sostiene que al ser vencida en el proceso judicial de ejecución de resolución administrativa promovido por doña Georgina Jacinta Acha Gálvez en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos (Exp. N° 183405-1998), los órganos judiciales demandados le requirieron que cumpla con pagar a la demandante la suma de S/. 10,000.00 por concepto de costos procesales, decisiones que, a su entender, vulneran su derecho a la tutela procesal efectiva, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 413° del Código Procesal Civil, los Gobiernos Locales y Regionales, así como los demás Poderes del Estado, están exentos de la condena de costas y costos procesales, y pese a ello los órganos judiciales decretaron su pago. afectándose de este modo el patrimonio municipal. El Procurador Público encargado de los asuntos del Poder Judicial, mediante escrito de fecha 20 de abril de 2011, contesta la demanda argumentando que se pretende dejar sin efecto una resolución judicial que tiene la calidad de cosa juzgada y revertir así el criterio jurisdiccional aplicado por los órganos judiciales demandados. La jueza a cargo del Vigésimo Segundo Juzgado Laboral de Lima, con escrito de fecha 25 de abril de 2011, contesta la demanda argumentando que las decisiones cuestionadas gozan de la inmutabilidad de la cosa juzgada, no correspondiendo dejarlas sin efecto.

Fundamentos del TC

Por lo tanto, es posible concluir que toda persona tiene derecho no sólo a que la decisión sea debidamente motivada, sino a que esta también esté fundada en derecho, sea favorable o desfavorable a sus pretensiones concretas en un proceso o procedimiento. En aplicación de los conceptos jurisprudenciales antes aludidos, este Tribunal aprecia a fojas 3, 5, 7-8 que tanto el Vigésimo Segundo Juzgado Laboral de Lima como la Primera Sala Laboral de Lima ordenaron que la Municipalidad Distrital de Chorrillos abone S/. 10,000.00 por concepto de costos procesales.

Tales decisiones judiciales, a entender de este Tribunal, vulneran el derecho a obtener una resolución fundada en derecho porque el artículo 47 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado, del cual forma parte el Gobierno Local, está exonerado del pago de gastos judiciales. Asimismo, el artículo 413° del Código Procesal Civil dispone que los Gobiernos Regionales y Locales están exentos de la condena de costas y costos procesales. Determinados así los alcances del régimen constitucional y legal del pago de gastos judiciales en el Estado (costas y costos), y los elementos tácticos de la demanda de amparo, se evidencia con meridiana claridad que las decisiones judiciales cuestionadas no se han sustentado en una aplicación e interpretación adecuada de las normas vigentes, válidas y pertinentes del ordenamiento constitucional y legal, descritas en el párrafo precedente, las cuales resultaban indispensables para la solución razonable del incidente de pago de costos procesales.

En este sentido, al promoverse un pedido de pago de costos y costas procesales en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, a la sazón un Gobierno Local, tal pedido se encontraba dentro de los supuestos normativos contemplados en las normas descritas, de las cuales se podía extraer claramente que el Estado está exonerado del pago de costos procesales.

Por lo expuesto, este Tribunal declara que, en el presente caso, se ha vulnerado el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho, reconocido en el artículo 139°, inciso 5, de la Constitución Política del Perú habiéndose verificado con amplitud que las resoluciones judiciales cuestionadas, de 8 de julio de 2008, 22 de octubre de 2009 y 17 de marzo de 2010, que dispusieron que la Municipalidad Distrital de Chorrillos abone S/. 10,000.00 por concepto de costos procesales, han vulnerado el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho, debe estimarse la demanda de amparo declarándose la nulidad de las decisiones judiciales cuestionadas; y reponiendo el derecho constitucional que le fue vulnerado a la entidad recurrente, los órganos judiciales demandados deben proceder a resolver el pedido de pago de costos procesales formulado por doña Georgina Jacinta Acha Gálvez

Decisión

El TC declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULAS las resoluciones judiciales de 8 de julio de 2008, 22 de octubre de 2009 y 17 de marzo de 2010, que ordenaron que la Municipalidad Distrital de Chorrillos abone S/. 10,000.00 por concepto de costos procesales.

ORDENAR que el Vigésimo Segundo Juzgado Laboral de Lima o el órgano judicial que haga sus veces resuelva nuevamente el pedido de pago de costos procesales formulado por doña Georgina Jacinta Acha Gálvez, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la presente sentencia.

5.2. Discusión de Resultados y contrastación de hipótesis

Analizadas las sentencias del Tribunal Constitucional, tenemos que -En el caso Luis Alberto Cardoza Jiménez recaído en la STC Exp. N° 02135-2012-PA/TC, debe colegirse que el Tribunal Constitucional peruano está declarando nula su sentencia del 11 de julio de 2013, siendo que, para declarar fundada la demanda en ese momento, es decir la que ordenó que Repsol YPF Comercial del Perú S.A. reponga a don Luis Alberto Cardoza Jiménez como trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos y costas del proceso en la etapa de ejecución, tomó en cuenta como medio probatorio un Acta de Infracción que había sido declarada nula en otra sentencia del Tribunal Constitucional peruano, la STC Exp. N° 02698-2012-PA/TC, con ello no solo vulneró la cosa juzgada, sino su propia figura de cosa juzgada constitucional, basándose en construcciones argumentativas que buscan justificar sus excesos, tal como los requisitos del TC para poder nulificar sus propias sentencias, circunstancias que afectan gravemente la seguridad jurídica que debe reinar en un Estado Constitucional de Derecho.

-En el caso Augusto Sipión Barrios, recaído en la STC Exp. N° 3700-2013-PA/TC, en donde, el Tribunal Constitucional expidió la sentencia que data del 28 de abril de 2014, en la cual declaró fundada la demanda en lo relativo a la vulneración de la garantía de interdicción de la arbitrariedad y dispuso que la SUNAT reinicie el procedimiento de fiscalización contra el accionante, se puede verificar que en efecto, sí se afecta la seguridad jurídica y la predictibilidad con el hecho de que se nulifiquen sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada constitucional, pues dicha práctica forense podría generar una circunstancia de incertidumbre en los justiciables, que tendrían dudas acerca de la firmeza de las decisiones jurisdiccionales que hayan sido emitidas en su favor por parte del Tribunal Constitucional; y es que, por otro lado, los que no estuvieron a favor con la decisión tomada, podrían formular a su vez un sinnúmero de nulidades con la expectativa de alcanzar la anulación de la sentencia que no les fue favorable.

De la misma manera, el horizonte no resulta confortador para aquellos otros ciudadanos que están pensando concurrir a la justicia constitucional en el afán de reparar agresiones o evitar amenazas a sus derechos fundamentales, puesto que, al final, no habría certeza de la firmeza de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional.

Será por tales motivos que el legislador constituyente incluso se preocupó por disponer puntualmente en el numeral 2 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que no se pueden «(...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución»

-En el caso Roberto Torres Gonzáles, recaído en la STC Exp. 4288-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia de fecha 22 de mayo del año 2012 que condenó al Ex Alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles por la comisión del delito de peculado de Uso por parte de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque; en ese caso como hemos observado se ha efectuado un cuestionamiento a la motivación de la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, procediendo a efectuar un pronunciamiento que atenta flagrantemente con las facultades discrecionales de la Sala Penal que las emitió. Bien sabemos que el Ex Alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles, en un afán de salir impune, buscó cuestionar en la vía constitucional los argumentos de condena de la sentencia penal, y que la misma sea declarada nula; circunstancia que fue amparada por el Tribunal Constitucional pese a que la labor de juzgamiento y valoración probatoria corresponde únicamente al Juez Penal, pues caso contrario cualquier proceso penal podría ser llevado a Sede Constitucional, convirtiéndolo en una tercera instancia para cuestionar sentencias condenatorias, lo cual no se condice en absoluto con la jurisdicción constitucional, menos aún con la labor del Tribunal Constitucional; más aún si se toma en cuenta que el propio Ex Alcalde dejó consentir la sentencia que lo condenaba.

-En el caso Gerardo Leónidas Castro Rojas, recaído en la STC Exp. 2880-2013, el TC no analiza un aspecto neurálgico en los pedidos de nulidad y de aclaración planteados por la judicatura: la vulneración del debido proceso por falta de motivación, como es bien sabido, el derecho al debido proceso comprende un catálogo de derechos que forman parte de su núcleo mínimo. Para este caso, los derechos constitucionales que adquieren especial importancia son los derechos de interdicción de la arbitrariedad y motivación de las resoluciones, sin embargo, el TC en su fallo de noviembre de 2013, realiza una motivación evidentemente limitada, ya que desproporcionadamente fundamenta sus contradicciones y la deficiente motivación de dos sentencias penales que en total suman treinta y un páginas en solo cinco párrafos. Asimismo, se atenta nuevamente contra la seguridad jurídica y contra la lucha contra la corrupción, puesto que omite dentro de su análisis que se trata de un caso que implica un acto de corrupción de un alto funcionario, siendo la lucha contra la corrupción un bien jurídico constitucionalmente protegido, el cual ha sido vulnerado mediante la llamada figura de la cosa juzgada constitucional.

-En el caso Municipalidad Distrital de Chorrillos, recaído en la STC Exp. 3238-2013 también se verifica una afectación por parte del Tribunal Constitucional a la naturaleza de cosa juzgada de las sentencias del Poder Judicial, lo que ahora nos hace figurar que ya no existe firmeza de las resoluciones judiciales ni la garantía de la seguridad jurídica de todo justiciable, más aún si su revisión es dejada en manos a un tribunal política y estratégicamente elegido por quienes ostentan el poder político

- En el caso de la sentencia recaída en el Recurso de Agravio Constitucional planteado por Panamericana Televisión, se verifica que nuevamente el Tribunal Constitucional nos muestra como efectivamente son muchos los casos en que se actúa más allá de los límites existentes al ejercicio de sus funciones y su autonomía procesal, habiendo declarado inexigible la deuda tributaria de la televisora citada.

En este caso, se advierte a juicio de la investigadora, un pleno atentado contra la seguridad jurídica, bajo la noción de la cosa juzgada constitucional, vulnerándose manifiestamente una competencia que no es propia del Tribunal Constitucional, dejando en la inexigibilidad una deuda tributaria que corresponde a una persona jurídica y no por quien se haya desempeñado como su titular, amparándose además en que el incremento de dicha deuda se debe a la acción dolosa de la gestión antecesora. En este orden de ideas quedaría establecido que las deudas asumidas por determinada gestión, luego de su cambio o transferencia se tornarían en inexigibles lo que contraviene como hemos señalado no solo los derechos de los acreedores a la satisfacción de sus acreencias, sino también a la seguridad jurídica que debe regir a todo Estado de Derecho.

- En conclusión y tal como hemos podido verificar en el análisis de algunas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional efectivamente si se ejerce el ejercicio de la tutela procesal constitucional contra resoluciones judiciales, entonces es posible que se afecte la inmutabilidad de la cosa juzgada del proceso común ordinario, a partir de los procesos de habeas corpus y de amparo resueltos por el Tribunal Constitucional, ya que el máximo intérprete de la constitución valiéndose de la figura de la cosa juzgada constitucional, puede, de manera antojadiza remover procesos

firmes, sin mayor motivación y alegando simplemente que la cosa juzgada constitucional es la relevante para un caso y no la cosa juzgada que genera una sentencia del Poder Judicial firme y ejecutoriada, lo que a su vez genera inseguridad jurídica en la población acerca de la predictibilidad de las decisiones.

CONCLUSIONES

1. El ejercicio de la tutela procesal constitucional contra resoluciones judiciales afecta la inmutabilidad de la cosa juzgada del proceso común ordinarios, a partir de los procesos habeas corpus y de amparo resueltos por el Tribunal Constitucional.
2. La naturaleza jurídica de las acciones constitucionales de garantía, como lo son la acción de amparo y hábeas corpus, es que se tratan de recursos sencillos no por la simpleza de su contenido, sino por la urgencia que amerita su tramitación y resolución al salvaguardar de forma eficaz derechos de índole fundamental, tan inherentes a la dignidad misma del ser humano por su condición de tal.
3. Proceden las acciones constitucionales contra resoluciones judiciales el amparo cuando vulneren la tutela procesal efectiva que comprende al acceso a la justicia y al debido proceso, debiendo incluirse tanto a los derechos fundamentales procesales como a los derechos fundamentales de índole sustantivo.
4. La seguridad jurídica forma parte de un Estado Constitucional de Derecho e implica que los sistemas jurídicos contengan los instrumentos y mecanismos necesarios para que los sujetos obtengan una cierta garantía sobre cómo van a ser las normas jurídicas que rigen sus conductas, y cuáles serán las que se apliquen cada una de las mismas.
5. En las resoluciones emitidas en los procesos de habeas corpus y de amparo resueltos por el Tribunal Constitucional y analizados en la presente investigación, se ha verificado que se ha modificado la cosa juzgada recaída en un proceso ordinario.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

1. Si bien el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, es en esa Carta Magna donde deben consagrarse los límites materiales o formales de dicha institución, que a diferencia del Congreso, no es un órgano elegido directamente por el pueblo soberano, sino que es designado políticamente por el Poder Legislativo, por tanto su poder estatal no puede superar al pleno del congreso, ni a las leyes que emita.
2. Debe restringirse la Cosa Juzgada Constitucional aplicada por el Tribunal Constitucional a determinados casos que, luego de conocidos en sede jurisdiccional han alcanzado la inmutabilidad e impugnabilidad y que haya versado sobre cuestiones de forma y no de fondo, lo que implica un pronunciamiento sobre el derecho material sometido a conflicto y hacer las veces de una tercer instancia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABAD YUPANQUI, Samuel. “El proceso constitucional de amparo”. Gaceta Jurídica S.A. Lima, 2004.
- ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Traducción hecha por Carlos Bernal Pulido. Centro de Altos Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2007
- ALMAGRO NOSETE, José. “Constitución y proceso”. Bosch Editores. Barcelona, 1984.
- ÁLVAREZ CONDE, Enrique Curso de Derecho Constitucional. Vol. I. Madrid: Tecnos. 1999.
- APARICIO PÉREZ, Miguel. La aplicación de la Constitución por los jueces y la determinación del objeto del amparo constitucional, en RCEC, N° 3, Mayo-Agosto, CEC, Madrid, 1989.
- BADENI, Gregorio. Nuevas perspectivas en el derecho constitucional. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires.
- BENDA, Ernesto. La Garantía Constitucional de los Derechos Fundamentales. Alemania, España.
- BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Derecho Constitucional comparado.

Editorial del Fondo de la Cultura Económica. México D. F.

- BIDART CAMPOS, Germán. Derecho de Amparo. Buenos Aires. Ediar.1961.
- BIDART CAMPOS, Germán. Manual de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos Aires, 1985.
- BLASCO SOTO, María del Carmen. "Reflexiones en torno a la fuerza de cosa juzgada en la sentencia dictada en cuestión de inconstitucionalidad". En: "Revista española de derecho constitucional". Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Año 14. N. 41. Madrid, 1994.
- BLUME FORTINI, Ernesto. El control de la constitucionalidad. Lima: Ersa, 1996.
- CAMPOS ARIAS, José Alberto y otros. 'La Corte Constitucional de Costa Rica'. San José. Seminario de graduación para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1983
- CAPPELLETTI, Mauro y Bryant Garth: El acceso a la justicia: La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. México: Fondo de Cultura Económica. 1996.

- CASTAÑEDA OTSU, Susana. Derecho Procesal Constitucional. Edit. Jurista Editores. Primera Edición. Lima Perú, marzo de 2003.
- CARPIZO, Jorge. *“El Tribunal Constitucional y sus límites”*, Editorial Jurídica Grijley, 1ra. Edición, Lima. 2009.
- CASTAÑEDA OTSU, Susana: “Cosa Juzgada” en: AAVV: La Constitución Comentada. Tomo II. Gaceta Jurídica. Primera reimpresión, Lima 2006.
- CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Tomo II, Palestra, 2006.
- CASTILLO CORDOVA, Luís, “El Tribunal Constitucional y su dinámica jurisprudencial”, Palestra, 1ra. Edición, Lima, 2008.
- CASTRO RIVERA, Edwin y Sergio J. CUAREZMA TERÁN. (Directores). A 21 años de la Constitución Política: Vigencia y desafíos. Managua, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), 2008.
- CÓRDOVA MEDINA, Pablo Alexander. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional y procesos constitucionales. Gaceta Constitucional N° 45.
- DE BERNARDIS, Luis Marcelo. La Garantía Procesal del Debido Proceso. Lima. Cultural Cusco S.A. –Editores, 1985.
- ESCUDERO ALDAY, Rafael. Positivismo y moral interna del derecho. Editorial Centro de estudios políticos y constitucionales. Madrid. 2000.

- ETO CRUZ. Gerard. Código Procesal Constitucional Comentado. Tomo I. Edit. Gaceta Jurídica. 1era Edición. Diciembre de 2015.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José. *La justicia constitucional europea ante el siglo XXI*. Madrid: Tecnos, 2002.
- FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *“Ensayos sobre derecho Procesal Constitucional”*, México, Porrúa y CNDH, 2004.
- FIGUEROA GUTARRA, Edwin. El Proceso de Amparo: Alcances, Dilemas y Perspectivas. Publicado en Gaceta Constitucional No. 53. Mayo 2012.
- GARCÍA BELAUNDE, Domingo. El Hábeas Corpus en América Latina. En REP N° 97, julio-setiembre. CEC. Madrid. 1997.
- GARCÍA TOMA, Víctor. Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993, tomo II, Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, Lima, 1998.
- GONZALES PÉREZ, Jesús.- El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. España. Editorial Civitas.- Segunda edición, 1985.
- HERRENDORF, Daniel – VIDARTE CAMPOS, Germán. Principios de Derechos Humanos y Garantías. Edit. Ediar. Buenos Aires.
- HUERTA GUERRERO, Luís Alberto, “El Tribunal Constitucional del Perú (Apuntes para una reforma de sus competencias)”. En Las tareas de la

transición democrática. Serie: Democracia N° 01. Comisión Andina de Juristas, Lima.

- HENKEL, Heinrich. Introducción a la Filosofía del Derecho. Taurus. Madrid. 1968.
- KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, 2 a edición, trad. de R. Vernengo, México, Porrúa, 1991.
- LANDA ARROYO, César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú. En Anuario De Derecho Constitucional Latinoamericano. Año XV, Montevideo, 2009, p. 277-310, ISSN 1510-4974.
- LANDA ARROYO, César. *“Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional”*, Palestra Editores, Primera Edición, Lima – 2011.
- LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Fondo Editorial de la PUCP. Lima. 1999.
- LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Editorial Palestra. Lima 2003.
- LEIBHOLZ, Gerhard, “Problemas fundamentales de la democracia moderna”, Instituto de Estudios Políticos, Madrid.
- LEÓN VÁSQUEZ, Jorge, “El Tribunal Constitucional y la configuración de su Derecho Procesal”. En: Justicia Constitucional. Año II, N° 4, Lima,

Palestra, 2006.

- LORCA NAVARRETE, Antonio María. “El derecho procesal como sistema de garantías”. En: “Boletín Mexicano de Derecho Comparado”. Universidad Nacional Autónoma de México. N. 107. Distrito Federal de México, 2003.
- LÓPEZ FLORES. Berly. Código Procesal Constitucional Comentado. Tomo I. Edit. Gaceta Jurídica. 1era Edición. Diciembre de 2015.
- LÓPEZ VIERA, José Reynado. Balotario Desarrollado de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Edit. Ubilex Asesores. Primera Edición. Lima, marzo 2017.
- MESÍA RAMÍREZ, Carlos. Exégesis del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, Lima, 2004.
- MIJAIL Mendoza: “La autonomía procesal constitucional”, en Justicia Constitucional, año II, N°4, julio-diciembre, Lima, 2006.
- MONROY GÁLVEZ, Juan. "Debido proceso y tutela jurisdiccional." En: “La Constitución comentada”. Gaceta Jurídica S.A. Tomo II. Lima, 2005.
- ORTECHO VILLENA, Víctor. Jurisdicción y procesos constitucionales. Lima: Rodhas, 2000.

- PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Edit. Dickinson. Universidad Carlos III. 2005.
- PÉREZ GORDO, Alfonso. El Tribunal Constitucional y sus funciones. Barcelona. Ed. Bosch, 1982.
- PEREZ LUÑO, Antonio E. Seguridad jurídica. Editores GARZÓN VALDÉS Ernesto y LAPORTA J, Francisco en El derecho y la justicia Editorial Trotta S.A. 2000.
- PÉREZ ROYO, Javier, *“Curso de Derecho Constitucional”*. Marcial Pons, Quinta Edición, Madrid - 1998.
- PÉREZ, Luis Carlos. Tratado de Derecho Penal. T III. Editorial Temis. 1978.
- PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 3 Ed. 1. II, 1987. 3 y 4.
- QUIROGA LEÓN. Anibal. Código Procesal Constitucional Comentado. Tomo I. Edit. Gaceta Jurídica. 1era Edición. Diciembre de 2015.
- QUIROGA LEÓN, Aníbal. Los excesos del Tribunal Constitucional peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución. Estudios Constitucionales, vol. 3, núm. 2, Santiago de Chile. 2005.

- ROLDÁN MARTÍNEZ, Luis. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Jesús A. Curso de Teoría del Derecho. Ariel Derecho. Barcelona. 1997.
- RUBIO LLORENTE, Francisco y otros, Derechos fundamentales y principios constitucionales, Ariel Derecho, Barcelona, 1995.
- SAGÜÉS, Néstor, “Derecho Procesal Constitucional”, Astrea, Buenos Aires, 1989.
- SAGÜÉS, Néstor. Hábeas Corpus. Edit. Astrea. 2da Edición. Buenos Aires. 1988.
- SÁINZ MORENO, Fernando, 'Tribunal Federal Constitucional Alemán'. Boletín de Jurisprudencia Constitucional, Madrid, N° 8, diciembre de 1981, pág. 606
- SHIAPPA – PIETRA, Oscar. El Problema del Acceso a la Justicia en el Perú. En Acceso a la Justicia. REVILLA, Ana Teresa Editora. Oficina de Proyectos del Poder Judicial. Lima: 1997.
- THOMPSON, José. Acceso a la Justicia y Equidad. BID y Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Primera Edición. San José – 2000.
- TOMA, Víctor.” *Teoría del Estado y Derecho Constitucional*”. 1ra Edición. Palestra Editores, Lima, 2005.

- VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. El control de la constitucionalidad de la ley, Estudio de derecho comparado. México, Editorial Porrúa, S.A., 1978.